

**UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE VERAGUAS
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO CON
ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO PROCESAL**

**EL PROCESO ABREVIADO EN EL NUEVO SISTEMA PROCESAL
PENAL ACUSATORIO**

**POR:
BERNALIS ANTONIO BATISTA GONZALEZ
7-104-655**

**TESIS PRESENTADA COMO UNO DE LOS REQUISITOS PARA
OPTAR AL GRADO DE MAESTRÍA EN DERECHO CON
ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO PROCESAL.**

2007

17 JUN 2010

DEDICATORIA

A Dios Todopoderoso que me da las fuerzas y la sabiduría para culminar los estudios.

A mi esposa AMINTA, mis hijos MARILUZ Y JONATHAN, a quienes les negué parte de mi tiempo, por quienes realizo todos mis esfuerzos.

Abogada del Autor.

INDICE GENERAL

	Página
DIDICATORIA	ii
AGRADECIMIENTO	iii
INDICE GENERAL	iv
RESUMEN	viii
SUMARY	ix
INTRODUCCION	vi
CAPÍTULO PRIMERO: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	
1.1. Antecedentes del problema	2
1.2. El problema	5
1.3. Definición del problema	5
1.4. Justificación del problema	6
1.5. Alcance, proyecciones y limitaciones	7
1.6. Delimitación del problema	8
1.7. La hipótesis de trabajo	9
1.8. Objetivos de la investigación	9
CAPÍTULO SEGUNDO. MARCO DE REFERENCIA	
2.1. Marco de antecedentes	12
2.1.1. Juicios de la antigüedad	12
2.1.2. Atenas	14
2.1.3. Roma	15

2.1.4. El régimen acusatorio del derecho germano antiguo ..	16
2.1.5. El sistema acusatorio inglés	17
2.1.6. El fuero juzgo ibérico	18
2.1.7. Característica del sistema acusatorio	19
2.1.8. Sistema inquisitivo	20
2.1.8.1. Aspectos históricos	20
2.1.8.2. La inquisición del derecho canónico	21
2.1.8.3. Característica del sistema inquisitivo	23
2.1.9. Sistema mixto	25
2.1.10. Sistema mixto clásico	25
2.1.11. El sistema procesal mixto moderno	29
2.1.12. Principios fundamentales del sistema procesal	
mixto moderno	30
2.2. Marco conceptual	37
2.3. Marco teórico	41
2.3.1. El sistema acusatorio moderno	41
2.3.1.1. Generalidades	41
2.3.1.2. Principios del sistema acusatorio moderno ..	43
2.3.2. Las partes intervinientes dentro del proceso acusatorio	62
2.3.2.1. Tribunal competente	62
2.3.2.2. Ministerio público	64
2.3.2.3. Querellante	65
2.3.2.4. Defensor	65

2.3.2.5. Imputado	66
2.3.2.6. Tercero incidental	67
2.3.3. Estructura del proceso penal acusatorio	68
2.3.4. El proceso abreviado en el sistema acusatorio ...	69
2.3.4.1. Generalidades	69
2.3.4.2. Oportunidad	75
2.3.4.3. Requisitos sustanciales	79
2.3.4.4. Requisitos formales	84
2.3.4.5. Controles del juez	86
2.3.4.6. Beneficios	87
a.) Para el imputado	87
b.) Para el tribunal de la causa	90
c.) Decisión	90
2.3.4.7. Recursos	91
a.) Apelación	92
b.) Casación	92
c.) De hecho	93
d.) Revisión	93

CAPÍTULO TERCERO: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Tipo de investigación	96
3.2. Fuentes básicas de información	97
3.2.1. Fuentes materiales	97

3.2.2. Fuentes personales	97
3.3. Población y muestra	98
3.4. Instrumentación de variables	98
3.4.1. Definición conceptual	99
3.4.2. Definición instrumental	100
3.5. Descripción de los instrumentos	100
3.5.1. La encuesta	100
3.6. Tratamiento de la información	100
 CAPÍTULO CUARTO: ANÁLISIS DE RESULTADO	
4.1. Análisis de datos	102
 CONCLUSIONES	
	137
 RECOMENDACIONES	
	139
 BIBLIOGRAFIA	
	141
 ANEXO	
	145

RESUMEN

Esta investigación jurídica de tipo descriptiva, tiene como antecedentes históricos los dos (2) sistemas procesales que han existido: el sistema procesal acusatorio que surgió en Grecia y Roma, y el sistema inquisitivo que predominó a finales del imperio Romano, toda la época medieval, hasta finales del siglo XVII; cuando surge el sistema mixto y el mixto moderno, que impera hasta nuestros días.

A raíz de la aprobación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en octubre de 1977, surge la problemática que el sistema judicial penal panameño debe ser reformado; ya que, en el actual sistema, la tramitación se retarda debido al prolongado procedimiento que está anclado en concepciones del siglo pasado, trayendo consigo quejas sobre la administración de justicia y la mora judicial. Situaciones estas que deben adecuarse a la realidad política y social, con leyes, normas y disposiciones que logren alcanzar la justicia, basados en los principios consagrados en los Tratados Internacionales.

Con el propósito de desarrollar este trabajo recurrimos a diversas posiciones sobre el tema, tanto en el derecho interno como en el comparado; al análisis de las normas consagradas en las constituciones y leyes; y por último a la jurisprudencia.

Al finalizar la investigación concluimos que la implementación del proceso abreviado en el nuevo sistema procesal penal acusatorio va a ser determinante en la solución rápida de las controversias penales.

Summary

This jurist research of descriptive type has as historic antecedents the two (2) processal systems that has been exist: one the accusatory system that begin in Greece and Rome; and two the inquisiture system that predomined to the end of Roman Empire, all the medieval epoch, throughout at the end of XVIII century; when to appear the mix system and the modern system than prevalence throughout our days.

At root of the approbation of the American Convention about Human Rights in october of 1977, began the problematic that the penal Panamanian jury system can be reformed; because, the actual system, the tramitation is slowing down due to prolongel procedure that is anchored in conceptions of last century, bringins jury default. Situations than can be seitable al the politic and social, reality, with law, rules and dispositions for attaining to reach the jury, based in the beginning consecrated in the international treats.

With the proposit of developpe this job, we have recourse to diversses positions about the theme, so in inter law as the compared the analisys of the consecrated norms or rules in the institutions and laws; and the end the jurisprudence.

At the end of this investigation we can conclude that the implementation of a bricf process in the new processal penal accusatory system go to be determinant in the quickly solution of the controversy penals.

INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia se han conocido dos (2) sistemas procesales penales: el Acusatorio se dio en Grecia y Roma, dominado por la oralidad; y el Inquisitivo que floreció a finales del imperio Romano, toda la Edad Media hasta finales del siglo XVIII, cuando surge una combinación de ambos, denominado el sistema procesal Mixto Moderno, que en la actualidad está consagrado en varias legislaciones.

El sistema judicial actual panameño, se caracteriza por ser mixto moderno, es decir, que en la etapa de instrucción predomina el inquisitivo con la escritura; y en la fase plenaria, el acusatorio con la oralidad.

A este sistema se le han incorporado instituciones de carácter acusatoria, como lo es el Proceso Abreviado, que se introdujo con la ley 1 de 1995, y tenía por objeto la adopción de normas que establecieran trámites y procedimientos breves, que no afectaran el debido proceso, permitiendo el impulso procesal más efectivo y la solución de los conflictos en términos razonables.

Con el transcurrir de los años, la crítica de la sociedad ha estado latente en torno a la llamada mora judicial, las penas anticipadas y la justicia selectiva. Todas estas críticas recomiendan que la justicia penal debe ser renovada en su integridad y buscar un sistema Acusatorio de Garantías que permitan el equilibrio entre los derechos, deberes y obligaciones de las partes.

Así pues, nace el Anteproyecto de Código Procesal Penal, que tiene como base una justicia expedita, ininterrumpida y que acabe con la mora judicial; recogiendo instituciones, que ya existen como el Proceso Abreviado, en el cual no existe formalismo para su petición y tramitación en el menor tiempo posible,

trayendo beneficios para las partes que intervienen en la celebración del acto oral.

Esta investigación se enmarca en el hecho de conocer los aspectos más relevantes de la aplicación del Proceso Abreviado, con la implementación del nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio, para la rápida solución a las controversias penales.

Atendiendo a las consideraciones expuestas, se cree prudente y necesario el desarrollo del trabajo investigativo que hemos intitulado **El Proceso Abreviado dentro del Nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio**; que servirá de base a los estudiosos del Derecho Procesal Penal Acusatorio.

La investigación está dividida en cuatro (4) capítulos. En el capítulo primero se desarrollan los antecedentes de la investigación, formulación del problema, alcances, proyecciones, limitaciones, objetivos generales y específicos que se pretenden lograr, además de la hipótesis.

El segundo capítulo corresponde al marco de referencia, que a su vez está dividido en el marco de antecedentes, el marco conceptual y el marco teórico. Allí se sustenta, teóricamente, el estudio, se definen los términos básicos y los antecedentes del problema.

El capítulo tercero, consta de los aspectos metodológicos y comprende el tipo de investigación, las fuentes de información (materiales, secundarias y de datos) el sistema de variables, la población y muestras; el tipo de instrumentos y el tratamiento de la información.

El capítulo cuarto trata sobre el análisis de los resultados obtenidos por medio de la aplicación del instrumento señalado, la encuesta.

Por último, se presentan las conclusiones y recomendaciones, la bibliografía básica consultada y los anexos, en el que se destaca el instrumento aplicado (encuesta).

CAPÍTULO PRIMERO
EI PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Antecedentes contextuales.

Existen antecedentes reales que permiten la objetividad de esta investigación, entre los que destacan: la crítica de la sociedad sobre los problemas de corrupción y tráfico de influencia, que aquejan a la administración de justicia y por consiguiente, la mora judicial, que se ha generalizado en los últimos años.

En cuanto a estudios e investigaciones anteriores al problema de investigación, no se ha encontrado, hasta la fecha, ningún estudio; sin embargo, si encontramos diversos estudios sobre la morosidad judicial y la situación de la administración de Justicia en Panamá.

En ese sentido, se puede mencionar el estudio efectuado por la Doctora Enriqueta Davis Villalba en el año 1993, en su obra, Situación Actual del Sistema de Administración de Justicia en Panamá 1990-1991, en el cual se señalan aspectos negativos sobre el Sistema Judicial.

- ¿Cómo ven los Abogados y Funcionarios de Justicia el Funcionamiento del Sistema?.
- ¿Visión del Sistema de Administración de Justicia?.
- ¿Cómo funciona el Sistema de Administración de Justicia en Panamá, actualmente?

En ese estudio se concluyó, que el sistema no se ajusta a la realidad social panameña y debe ser modificado, parcialmente. Entre los factores que obstaculizan el funcionamiento del sistema, resulta de vital importancia, la falta

de recursos y de personal, considerando también, que es necesario aumentar el número de tribunales.

En la búsqueda de nuevas estructuras jurídicas para el funcionamiento del sistema de enjuiciamiento criminal se aprobó la ley 21, de 10 de diciembre de 1993, que estableció dos comisiones encargadas de elaborar los anteproyectos de modificación del Código Penal y Procesal Penal, debido a que los cambios surgidos, en el ámbito internacional así lo exigían, y los códigos vigentes en el país estaban anclados en las antiguas concepciones del siglo XIX.

El 17 de noviembre de 2005, mediante Decreto Ejecutivo N° 541, el Presidente de la República, crea un Comité Técnico para la revisión de los anteproyectos de Código Penal y Código Procesal Penal, preparados por la subcomisión de Reformas Judiciales. En ese mismo Decreto se creó la Comisión Codificadora encargada de la elaboración del Proyecto del Código Procesal Penal.

Sobre el particular, la comisión codificadora en la exposición de motivos de su informe estableció que “la justicia penal patria, se ha insistido de modo permanente, requiere ser renovado de modo íntegro. Durante décadas al procedimiento penal o punitivo solamente le fueron introducidos reformas parciales o parches conforme iban apareciendo nuevas tendencias o corrientes tanto en el Derecho Comparado como formas de pensar elaboradas por eminentes tratadistas o doctrinarios. Soplaron los vientos de la audiencia premilinar, el proceso abreviado, el proceso directo, y los derechos a las víctimas, etc., y corríamos a incorporar esas novedades en nuestro

ordenamiento procesal sin equilibrar o sopesar si las mismas eran o no cónsonas con nuestro ordenamiento constitucional y republicano y si se ajustaban o no a las normas rectoras constitucionales en materia de derechos y libertades. Peor todavía no sopesaba nuestra propia realidad social” (Anteproyecto, 2006, pág.24).

En ese mismo orden de ideas, la Comisión Codificadora, considera que el anteproyecto de Código Procesal Penal, supera los viejos, injustos y rancios institutos propios de un sistema inquisitivo que ideológica, histórica y filosóficamente contradice la idea del debido proceso. El sistema actual de juzgamiento penal ha puesto al desnudo un rotundo fracaso. La mora judicial, la inseguridad jurídica, la impunidad, las penas sin condenas o anticipadas, la justicia penal selectiva, etc., fueron entre otros, los cintillos que en la psiquis social se han enarbolado como argumentos centrales que se esgrimen cuando se trata de cuestionar el sistema. La credibilidad social respecto al tema de la justicia se encuentra en niveles de descrédito e incertidumbre.

Las manifestaciones de violencia, de criminalidad creciente y el alto volumen de denuncias, aumentan la carga laboral de los tribunales penales, cuya tramitación se retarda debido al prolongado procedimiento a que deben ser sometidas las causas penales. Se requiere entonces, la adopción de normas que establezcan trámites y procedimientos breves que, sin afectar las garantías del debido proceso, permitan el impulso procesal efectivo, la solución de los conflictos y la dilucidación de las causas en términos razonables.

Con esta propuesta de reforma al sistema judicial panameño, se pretende proveer al país de un nuevo Código de Procedimiento Penal, actualizado con teorías y corrientes que fundamentan al Sistema Acusatorio.

1.2. El problema

¿Cuál es el impacto Socio-Jurídico de la aplicación del Proceso Abreviado, con la implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio, en la Provincia de Los Santos?

1.3. Definición del problema

Los sistemas de enjuiciamiento penal son tan antiguos como la aparición del hombre en la tierra y cada una de las formas de enjuiciamiento, que han existido, tienen connotaciones especiales.

En todos los estratos sociales, se habla de la búsqueda de mecanismos para el mejoramiento del sistema judicial, pues el actual sistema es de carácter inquisitivo, en el cual, “el Ministerio Público no puede seguir con el doble papel de ser juez y parte. Como respuesta a los argumentos anteriores se nos presenta la figura del Juez y Magistrado de Garantías como la más idónea para mover el fiel de la balanza de la justicia entre un fiscal que investiga y un Tribunal que juzga y decide” (Anteproyecto, 2006, pág. 25)

La mora judicial, que trae consigo el retraso en el manejo de los procesos penales, aunado al hacinamiento carcelario y al clamor de la sociedad que exige una justicia pronta e inmediata, despertó en los entes involucrados en la administración de justicia, la búsqueda de un nuevo sistema de procedimiento

penal, que responda a las necesidades existentes; problema que se agudiza en los últimos años, con el aumento de la criminalidad.

A inicios de la década del noventa con el cambio en el sistema de gobierno, cuando la clase política civil asume el control y con el ánimo de instaurar un régimen democrático en el país, se siente la necesidad de recobrar la imagen del sistema de gobierno y es así, que se busca modernizar la administración de justicia en todos los niveles, no solo en la parte estructural, sino también en su componente humano, ya que la seguridad jurídica de un Estado se mira por el ojo de la justicia, a la cual le corresponde el reconocimiento de las garantías fundamentales, que es lo que viene a dar tranquilidad a todo pueblo.

Tal situación se presenta como un problema, porque existen valores, principios, términos y garantías que deben protegerse, con el fin de que una persona acusada tenga derecho a un proceso justo.

Dichas condiciones permiten plantear este proyecto de investigación y con ello, presentar los aspectos relevantes del Proceso Abreviado, al igual que del nuevo Sistema Acusatorio; resaltar los fines para los cuales va a introducirse esta figura en la legislación procesal penal, y su aplicabilidad en los diferentes procesos penales en la Provincia de Los Santos.

1.4. Justificación del problema

La investigación es fundamental y de suma relevancia, porque con ella se pretende determinar el impacto socio-jurídico de la aplicación del Proceso

Abreviado y su implementación en el nuevo Sistema Penal Acusatorio, en un área determinada del país y en un período de tiempo específico.

Lo expuesto anteriormente establece si existe la posibilidad de mejorar el sistema de justicia penal actual, para la solución rápida de las controversias penales y mayor satisfacción de las personas que intervienen en el Sistema Judicial (imputado, defensor, tribunal), en todo los niveles; quienes invierten tiempo y recursos, para obtener una justicia pronta y expedita.

Con la finalidad de darle respuesta a la problemática planteada podría derivarse una mejor inversión de recurso humano y tecnológico del Órgano Judicial, y demás entes que intervienen en la Administración de Justicia, y que podrían dedicarse a otras fases del proceso (fianzas, medidas cautelares, sentencias, etc.).

Es necesario recalcar, que la investigación se justifica, pues con el análisis de las normas jurídicas vigentes y el estudio del anteproyecto de Código Procesal Penal, se determinará si se hace necesario introducir modificaciones a fin de garantizarle la solución rápida de los conflictos de las personas que intervienen en la celebración de la audiencia.

1.5. Alcances, proyecciones y limitaciones

1.5.1. Alcances

La investigación está relacionada con el Proceso Abreviado y la implementación del nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio, que se tramitará en los Juzgados y Tribunales de Garantías; pero, haciendo énfasis en la

determinación de si el proceso abreviado será efectivo en la solución rápida de las controversias penales.

1.5.2. Proyecciones

Que la investigación proyecte un impacto social particularmente, en el campo jurídico, como un elemento más de análisis en torno a la llamada mora judicial y la lentitud de los procesos penales. De allí podrían derivar sugerencias y recomendaciones, para que se modifique el sistema procesal vigente, permitiendo el impulso procesal y la solución de conflictos en términos razonables.

1.5.3. Limitaciones

La poca disponibilidad de bibliografía especializada, en relación con el proceso abreviado, es uno de los mayores inconvenientes; pues, generalmente, los tratadistas se han dedicado al estudio del Sistema Procesal Acusatorio y el Mixto Moderno. Pero a la vez, el proyecto presenta ventajas por ser un tema poco estudiado y con mucha credibilidad.

1.6. Delimitación del problema

La delimitación del problema corresponde a la aplicación del Proceso Abreviado, en el nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio, una vez se logre la aprobación del anteproyecto de ley por parte de la Asamblea Nacional de Diputados.

Con esta premisa, se investigará el impacto socio- jurídico de la aplicación del Proceso Abreviado, en el nuevo Sistema Penal Acusatorio en la Provincia de Los Santos.

1.7. La hipótesis de trabajo.

La hipótesis como supuesto, se puede definir como un intento de explicación o repuesta tentativa de un fenómeno y su función consiste en delimitar el problema, objeto de investigación, de acuerdo con elementos como el tiempo y la forma.

Para el desarrollo de la investigación hemos planteado el siguiente supuesto:

Con la implementación del Nuevo Sistema Procesal Acusatorio, el Proceso Abreviado será determinante para la solución rápida de las controversias penales.

1.8. Objetivo de la investigación.

Con esta investigación se busca lograr los siguientes objetivos.

a. Generales.

- ❖ Determinar el impacto socio-jurídico de la aplicación del Proceso Abreviado, con la implementación del nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio.

b. Específicos.

- ✓ Identificar la tendencia del Proceso Abreviado en el nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio, en Panamá.
- ✓ Describir las fases o etapas del Proceso Abreviado, introducido en la legislación Procesal Penal panameña.
- ✓ Explicar las fases del Proceso Abreviado, según la legislación

procesal penal acusatoria.

- ✓ Determinar la efectividad del cumplimiento de cada uno de los pasos o etapa de esta institución.
- ✓ Señalar las causas de la efectividad o no de la aplicación del Proceso Abreviado, en el nuevo Sistema Procesal Acusatorio.

CAPÍTULO SEGUNDO
MARCO DE REFERENCIA

2.1. Marco de Antecedentes.

2.1.1. Juicios de la antigüedad

Para realizar un estudio retrospectivo de los sistemas procesales penales, es necesario, tomar en consideración que, en la existencia de los mismos, la cultura y el desarrollo social de los pueblos desempeñan un papel preponderante en la vida jurídica.

Históricamente, en el sistema jurídico penal han preexistido dos (2) modelos procesales penales: el Acusatorio y el Inquisitivo, “pero ninguno ha existido en forma pura, por el contrario, desde Grecia y Roma encontramos formaciones, predominantemente, acusatorias que coexisten o son seguidas de formaciones procesales predominantemente inquisitivas” (Ossorio, 1994).

La anterior aseveración significa, que se daban las tres (3) funciones principales que se cumplen dentro de todo proceso: la acusatoria, la defensiva y la decisoria. Tales funciones que eran desempeñadas por personas distintas y también por el predominio de la actividad de las partes en el ejercicio de la acción y el desenvolvimiento del proceso, sin que el ofendido perjudicado acusara, públicamente, el presunto responsable. Éste a su vez, podía defenderse en público, de manera personal o por medio de otra persona que representara sus intereses. El debate entre acusador y acusado se realizaba ante un funcionario o un Tribunal que juzgaba o decidía la controversia mediante un fallo obligatorio para las partes.

Según este sistema, llamado proceso acusatorio puro, el Tribunal no hace, sino resolver, el acusador persigue y el imputado se defiende.

La doctora Teresa Peña Silgado sostiene que “El surgimiento y desarrollo del sistema procesal penal acusatorio se ha asociado a regímenes políticos de orientación democrática, donde la relación ciudadano–estado acentúa el respeto a ciertas esferas de libertades mínimas del individuo y donde la iniciativa y participación del pueblo adquieren un papel relevante en la discusión de los asuntos judiciales” (Peña S., 1996 pág. 24).

Con el advenimiento de una concepción humanista del derecho, estas dos (2) formas con sus características específicas no pudieron aplicarse, pues tenían ventajas y desventajas. Las diferentes legislaciones fueron adoptando un sistema mixto, que se conoció también, como sistema francés; toda vez, que su creación se debe a la legislación francesa de 1791. Este sistema fue adoptado, posteriormente, en la instrucción sumarial de ese país en 1808, y de allí se propagó a otros estados de Europa Occidental, siendo modificado durante la segunda mitad del siglo pasado.

Así pues, con el surgimiento del Derecho Procesal Mixto Clásico (codificación napoleónica), se inician los modelos procesales contemporáneos, que incluyen elementos acusatorios e inquisitivos.

Al respecto, Gil Miller Pujol agrega, “puede afirmarse que desde la antigüedad todos los sistemas procesales unos más que otros han sido mixtos... que, realmente, se dice poco de un sistema procesal penal cuando se lo califica de “mixto”, ya que con ello no se puede conocer su verdadera naturaleza, ni mucho menos efectivo funcionamiento” (Pujol J., 1981, pág. 50).

2.1.2. Atenas

Surge aquí, en la democracia clásica griega una de las manifestaciones históricas del sistema acusatorio que, si bien es cierto, restringió a los ciudadanos en ejercicio, pero dio la oportunidad al pueblo.

Además, se le atribuye también, la importante división de las infracciones penales en públicas y privadas (patrimoniales, de familia, etc.), que son resabios, en Occidente, de lo que hoy se conoce como calumnia e injuria, delitos de acción privada.

En la época griega, ante un hecho considerado como delito, cualquier ciudadano ateniense podía formular una acusación ante un Arconte, funcionario estatal, con quien se iniciaba el proceso, este funcionario convocaba al Tribunal competente para la causa, el cual estaba compuesto por varios ciudadanos escogidos al azar en listas preestablecidas. Al ciudadano particular (acusador) le correspondía la carga de la prueba, reunir las u ofrecerlas ante el Tribunal para probar el hecho; y su fracaso, le acarreaba, a su vez, una infracción penal por falsa calumnia.

Para la doctora Teresa Peña Silvado “El juicio era oral, público y contradictorio, en presencia del pueblo que era testigo activo de todo el proceso. Después del debate entre el acusador y el acusado, enfrentados en términos de igualdad, el Tribunal resolvía el caso, votando, mediante el depósito de esferas (blancas, para la absolutoria, y negras para condenatoria) en unas urnas destinadas para tal propósito” (Peña S., 1996 pág. 24).

Se piensa que ha variado muy poco el sistema acusatorio en la aplicación actual de nuestro derecho procesal penal, sobre todo con la similitud que tiene el tratamiento de los procesos penales en las esferas superiores que son decididos por medio de jurados de conciencia.

2.1.3. Roma

El sistema acusatorio, modificado y perfeccionado del griego, floreció durante la época romana de madurez republicana. Se distinguieron porque aplicaron los dos (2) sistemas acusatorio e inquisitivo y por lo tanto, se considera a Roma como el precursor del sistema mixto.

En el sistema acusatorio romano existía la figura de un Pretor quien “actuando como magistrado en nombre del Estado, recibía la denuncia penal de cualquier ciudadano que quisiera interponerla. Este pretor nombraba un acusador de probada solvencia moral y lo investía con el poder para investigar el hecho acusado. Se dio origen a una auténtica fase instructiva, de preparación, a cargo del acusador, en principio secreta y más tarde pública. Una vez concluida la investigación, correspondía al pretor fijar la fecha para el juicio, el cual se realizaba en forma oral y pública, ante Tribunal compuesto por varios ciudadanos escogidos de listas previamente elaboradas. En el juicio regía el contradictorio, a saber, debate entre acusador y acusado, en términos de relativa igualdad; luego se incorporaban las pruebas de cargo y de descargo para, finalmente, fallarse el asunto mediante la votación de jueces” (Peña S., 1996, pág. 25).

Sobre el particular, el profesor Carlos Muñoz Pope sostiene, "...lo que respecta al sistema de enjuiciamiento penal de Roma, la diversa sucesión de etapas impide describir un modelo único válido en todo momento para Roma. No obstante, es necesario señalar que la base fundamental del sistema era la acusación popular ejercida solo por los ciudadanos romanos y de cuyo ejercicio quedaban excluidas las mujeres y los libertos. Quien ejercía la acusación no podía integrar o formar parte del tribunal de instancia, promover él mismo el juicio sin acusación previa del ciudadano. La esencia de todos los procedimientos romanos era la oralidad, la inmediación y la contradicción" (Muñoz P., 2004, pág. 19).

Tanto en el sistema ateniense como en el romano, se nota que, el procedimiento acusatorio era aplicado en todo tipo de delito dentro de un margen de igualdad hasta para tomar la decisión, con la única diferencia que no existía la jurisdicción y la competencia como las que se tienen en la actualidad.

2.1.4. El régimen acusatorio del derecho germano antiguo

La composición privada, era la forma en que los pueblos germánicos antiguos resolvían los conflictos entre las personas. Si alguien le causaba daño a otro u ofendía su derecho tenían que ponerse de acuerdo y el agresor recompensaba o le hacía un pago al agredido, este pago lo hacía con cierta cantidad de bienes, con lo cual quedaba solucionado el problema. Pero, si no se cumplía o fallaba la composición privada, el ofendido o sus familiares podían presentar un reclamo ante un Tribunal popular establecido para tal propósito.

Para el desarrollo de este reclamo “El acusador y acusado se enfrentaban en juicio oral, público y contradictorio. Los escritos y formalismos dominaban la recepción de pruebas al punto que el litigio era ganado por quien presentara mejor y mayores testimonios de su fama u honor personal. Si el conflicto resistía a pesar de las probanzas testimoniales, se dirimía por duelo entre los contendientes, o mediante el sometimiento a ciertas probanzas especiales como las ordallas o juicio de Dios, método mediante los cuales la divinidad mostraba, por signos físicos fácilmente observados, la justicia del caso. La resolución tomada por el tribunal no se podía impugnar ante autoridad superior” (Peña S., 1996, pág.26).

2.1.5. El sistema acusatorio inglés

Se considera que este sistema, tuvo su influencia en el sistema procesal mixto clásico y, por consiguiente, en Latinoamérica. El realce a este sistema se lo dio el Iluminismo del siglo XVIII y ya para esa época, el sistema inquisitivo que prevaleció en Europa Continental estaba en decadencia.

La Revolución Francesa de 1789 incorporó sus principales características en el primer sistema procesal que adoptó Francia después de su revolución.

El sistema procesal inglés tuvo su evolución en la Edad Media, hasta la Época Moderna, sin adoptar nada del sistema inquisitivo canónico. Vale señalar que, las libertades ciudadanas clásicas fueron respetadas.

La citada doctora Teresa Peña Silvado sostiene que “...en Inglaterra, cierta tendencia democrática de organización social, se reflejó en las instituciones jurídicas procesales, a través del fortalecimiento del modelo

acusatorio, en el cual, para la gran mayoría de los delitos, el Juez no podía actuar de oficio, solamente si media acusación del particular. Corresponde a este ciudadano particular, no solo iniciar el proceso, sino mantener la acción durante todo su curso. La labor de reunir pruebas queda, sin embargo, a cargo de funcionarios públicos, independientes de la corona y de jueces de paz. Existe además, como es ampliamente conocido, un jurado popular, el cual ejerce una función controladora respecto de las acusaciones, sea para no permitir que prospere aquellas carentes de fundamento, o para frenar otras demasiado temerarias. El juicio propiamente dicho se rige por los principios característicos del régimen acusatorio, oralidad, publicidad y contradictorio entre las partes” (Peña S., 1996, pág. 26).

De esta forma el ejercicio de la acción privada, como característica de los sistemas acusatorios, reviste entre los ingleses una singular energía, pues sino concurría el acusador, el día señalado para la audiencia, se ponía en libertad al acusado y era inútil la reunión del jurado.

2.1.6. El fuero juzgo ibérico.

En el año 663 D.C., existía en la Península Ibérica un compendio de leyes conocidas como el Fuero Juzgo, raíz del sistema procesal penal español. Debido a las situaciones históricas que le tocó vivir a Latinoamérica, dichas leyes tuvieron incidencia en el derecho penal panameño.

El Fuero Juzgo, mencionado anteriormente, era un compendio de leyes y en el caso de delitos públicos sólo se podía proceder a instancias del ofendido, “la denuncia o querella debe ser por escrito y contener una descripción, lo más

detallada posible, de los hechos acusados. Los actos procesales se tramitan más bien privadamente, pero si se mantiene el carácter contradictorio en ellos y lo más importante, se desconcentran las diferentes funciones de la relación procesal: al juez no corresponde la investigación del asunto, sólo desempeña un papel arbitral, oyendo a las partes y dictando sentencia; a las partes toca realizar la investigación de los hechos y aportar las pruebas que el Juez valora. La legislación foral ibérica evoluciona en sentido de instituir un procedimiento oral, público y contradictorio, claro está, con anterioridad al auge del sistema inquisitivo canónico” (Peña S., 1996, pág. 27).

2.1.7. Características del Sistema Acusatorio

Entre los principales rasgos característicos del sistema acusatorio, se pueden mencionar, después de un breve recorrido histórico, los utilizados por Teresa Peña Silvado, en su obra citada.

- a. Instancia única:** La administración de justicia se hace de manera directa, a través de tribunales y jurados populares.
- b. Acusación:** Se confiaba a los ciudadanos particulares con la responsabilidad de probar su acusación, “so pena” de recibir sanciones en caso de no probar la acusación.
- c. Igualdad de las partes:** Garantiza al acusado de un delito gozar de libertad, mientras se ventila el proceso y se le permitía asumir su propia defensa o ayudarse con la defensa técnica. Tenía las mismas ventajas que el acusar en lo que respecta a presentar pruebas, interrogar testigos y contestar los cargos.

- d. Pasividad del Juez:** Es el árbitro ante quien formulan los hechos y se muestran las pruebas. Conoce las mismas y falla el asunto en torno a ellas.
- e. Decisión conforme a equidad y no a derecho:** El tribunal resuelve según su libre entender, valorando libremente los elementos probatorios puestos a su consideración. No está supeditado a determinado tipo de pruebas, ni hacer valor de las mismas.
- f. Oralidad:** Es el rasgo característico del Sistema Acusatorio, porque alcanza una comunicación más rápida y directa entre los sujetos que participan en el proceso.
- g. Publicidad:** Se entiende como la actuación de las partes y del Juez a la vista del público. Se convierte así el proceso en un mecanismo cívico-pedagógico donde se renuevan y actualizan los más importantes valores sociales y los más destacados derechos individuales.
- h. Contradictorio:** Le da la oportunidad al acusado de responder a los cargos formulados y en el camino de todo el proceso puede alegar y presentar todos los recursos en bien de sus intereses.

2.1.8. Sistema Inquisitivo.

2.1.8.1. Aspectos históricos.

El Sistema Inquisitivo aparece por primera vez en Roma, durante la época del imperio, luego que decae el sistema acusatorio dominante durante la época republicana, y trae consigo la pérdida de la soberanía depositada en el pueblo,

constituyéndose, así un nuevo orden procesal, que se instaura en un sistema menos democrático en el cual el monarca asume todos los poderes.

Se nombraba un Magistrado o Juez que administraba justicia en nombre del Monarca, quien le daba una elevación expresa para tal fin, este se encargaba de investigar el hecho punible y de dictar la sentencia del caso. Surgen nuevos funcionarios que realizaban las primeras investigaciones, reunían las pruebas y se las entregaban al juzgador. Había reserva de los actos procesales, existía el recurso de apelación ante el Monarca y surgió la tortura como método de interrogación. Los rasgos anteriores de este sistema son desarrollados por el Derecho Canónico en la Edad Media.

Sostiene el Doctor Luís Paulino Mora Mora que, “la utilización de este sistema es propio de regímenes despóticos, absolutistas y totalitarios, que se relacionan con la Roma imperial y el Derecho Canónico. En él los derechos de las partes y en especial del imputado, están soberanamente disminuidos. Al juez se le erige en amo del procedimiento, es la garantía de la imparcialidad y la búsqueda de la justicia; para lograrla se permite toda clase de exceso y aún la actuación de oficio. Al pueblo se le margina de la administración de justicia y es llevado al ejercicio propio del magistrado que representa a Dios, al Monarca o al Emperador, por lo que debe confiarse enteramente en ellos”. (Mora M., 1991, pág. 10).

2.1.8.2. La inquisición del Derecho Canónico

La Iglesia Católica Romana, mediante el Derecho Canónico fue la que dio vida al sistema procesal inquisitivo, ya que “en el siglo XII d.c. la política

expansiva del catolicismo romano en toda Europa continental y la necesidad de controlar los brotes disidentes (diversos movimientos heréticos) hicieron que el Papa Inocencio III, sobre la herencia del derecho romano imperial avanzado, reformara el régimen procesal hasta ese momento imperante, de corte acusatorio, e introdujera los rasgos típicos del inquisitivo” (Peña S., 1996, pág. 31).

Este sistema, surge al declinar la forma o sistema acusatorio y al imponer el derecho canónico un sistema propio, en donde se presentaban características procesales distintas a la anterior. Las funciones fundamentales de los procesos acusatorios, defensivos y decisivos se concentraban, en una sola entidad competente, que en nombre de Dios, investigaba la verdad y, con base en ella, se decidía.

Es así, como nace el Ministerio Público actual y se da el paso del sistema inquisitivo, totalmente, opuesto al acusatorio; donde era un funcionario público el que iniciaba, sustanciaba y decidía el caso.

Las características secundarias del sistema inquisitivo eran diferentes a la forma acusatoria. El proceso era secreto, pues ni el pueblo ni nadie fuera del funcionario, tenía acceso al juzgamiento y como las partes solo podían intervenir parcialmente, se hizo necesario dejar constancia escrita de todo lo que existía en el proceso para efectos de las decisiones y revisiones. Por eso, el procedimiento se hizo escrito.

El aporte fundamental del sistema inquisitivo, consiste en introducir el ideal que la actividad represiva del delito es misión del Estado y no asunto

privado de la víctima. Se señaló como su principal defecto, que el encargado de esta persecución oficial era el Juez, en el cual convergían, en una misma persona, el carácter de Juez y parte.

El sistema inquisitivo tuvo un largo período de dominio, hasta su decaimiento en el siglo XIX. Sin embargo, tuvo gran influencia en la elaboración de los primeros códigos de Latinoamérica. Durante su dominio se dividió el procedimiento en dos etapas: “una inquisición general, en la que se determina el hecho delictuoso y se busca a la persona responsable de su comisión y una inquisición especial, que se llevaba a cabo cuando, plenamente identificada la persona acusada, se recibían las pruebas del caso y se sentenciaba” (Peña S., 1996, pág. 31).

2.1.8.3. Características del sistema inquisitivo.

Según la profesora Teresa Peña Silvado, en el sistema procesal inquisitivo se constituyeron los siguientes rasgos:

- a) Justicia delegada:** Concentra el poder en un solo órgano estatal (el Papa y el Monarca). De él emana la delegación a órganos o funcionarios subalternos quienes administran la justicia por delegación expresa.
- b) Proceso de oficio:** Es el rasgo más característico de este sistema procesal, ya que el denunciante no tiene ninguna obligación de probar, ni asume ninguna responsabilidad, solo lo pone en conocimiento de los funcionarios delegados, quienes se encargarán de investigar y decidir sobre el caso.

- c) **El juez activo:** El juez no puede esperar, pasivamente, que lleguen los elementos probatorios al proceso, tiene que buscarlos, razón por la cual, desempeñaba un papel activo en el proceso.
- d) **Preponderancia de la instrucción:** La fase instructiva es preponderante, ya que de ella depende la suerte del acusado. Finalizada la misma, si no se daba un sobreseimiento, el imputado era llamado a juicio que era el momento en que tenía conocimiento de las pruebas en su contra. Eliminaba la oralidad y la publicidad.
- e) **Escritura:** Todos los actos procesales se hacían por escrito, eliminando así la publicidad del proceso y se daba, toda vez que, el funcionario delegado como señor absoluto del proceso no tenía necesidad de rendir cuenta a nadie.
- f) **No contradicción:** No era necesario que el acusado se opusiera a los cargos, ni presentara prueba para contradecirlos o atenuarlos.
- g) **La indefensión:** En este sistema el acusado no se tomaba como parte del proceso, sino objeto del proceso. El Estado le negaba los derechos mínimos y lo sometía a presiones y vejámenes sin límites, también se le negaba conocer quién lo acusaba, qué hechos y probanzas había en su contra.
- h) **Decisión conforme a derecho:** Existía una serie de pruebas tasadas en las que el juez estaba obligado a valorar. Todo ello para controlar los poderes del juez, quien debía decidir en derecho.

2.1.9. Sistema Mixto.

Como ya se ha comentado, los sistemas procesales conocidos, históricamente, no han sido de absoluta pureza, lo que ha hecho que se mantengan rasgos característicos tanto del sistema acusatorio como del inquisitivo mezclado entre sí que dan vida al sistema mixto clásico.

2.1.10 Sistema Mixto Clásico.

Como su nombre lo indica, existe en este sistema rasgos acusatorios y característicos del inquisitivo, cuyos antecedentes se encuentran en los sistemas procesales alemanes, específicamente, en la Constitución Criminalis Carolina de 1532 y en la Ordenanza Criminal de Luís XIV en 1670, que dividía el juicio en dos (2) períodos “1º la investigación de los hechos; 2º, su calificación por el mismo juez. La primera parte se llamaba de formación (el sumario); la segunda el juicio ordinario o extraordinario (el plenario) (Zavala L., 1947, pág.95).

Pero fue con la Revolución Francesa de 1789 que surge la verdadera transformación jurídica del sistema penal, porque como se dijo anteriormente, las condiciones sociales, económicas de los pueblos desempeñan un papel importante en su vida jurídica.

La ilustración, en el siglo XVIII, fue una época de cambios sociales y grandes pensadores como Voltaire, Rousseau, Beccaría, quienes contribuyeron a la reforma social de esa época. Se enfrentaron al régimen gobernante del momento, en el cual, el sistema inquisitivo presentaba la voluntad absoluta del monarca. Fue una lucha tendiente a lograr la reforma de los Códigos Criminales, los cuales contenían castigos muy severos para sancionar a los infractores; a la

vez, que el tratamiento que se les dispensaba a los reos era inhumano. No había una relación justa entre el delito y la pena, y así se podía castigar con la muerte, el hurto de un caballo o de una oveja, o de una irrisoria cantidad de dinero como cinco (5) chelines.

Beccaría en 1764 escribió su obra Crímenes y Castigos, en la cual rechazaba la idea que se tenía de que los delincuentes debían sufrir horribles castigos para que se arrepintieran y no volvieran a delinquir. Era partidario de que la prevención de los delitos y la resocialización contribuirían, indudablemente, más que los castigos y torturas; y que estas no eran propias de pueblos civilizados.

Igualmente, estuvo en contra de la pena de muerte, pues consideraba que iba en detrimento de los derechos naturales del hombre, pero si se aplicaba por error no podía subsanarse porque era irremediable. Su obra causó mucho revuelo, fue traducida en varios idiomas y trajo consigo una revisión a lo establecido en materia criminal en muchos países y ya para finales del siglo XVIII se habían logrado progresos considerables relacionados con la rigurosidad en la aplicación de las penas, los insolventes y deudores que eran deshonrados de por vida, quienes se vieron librados de este castigo y mejoró, sustancialmente, el tratamiento de los prisioneros.

Con la Revolución Francesa en 1789, el régimen instaurado adoptó casi por completo el sistema procesal acusatorio inglés, que no había recibido la influencia del sistema inquisitivo de la Edad Media.

Sin embargo, este modelo acusatorio inglés no duró mucho y con el transcurso de la revolución, se produce el Código Napoleónico de 1806, (Código de Instrucción Criminal), que llevaba aparejado el régimen procesal penal, el cual tuvo una gran influencia y que hoy conocemos como Sistema Procesal Mixto Clásico.

El esquema de organización judicial propuesto por el Código de Instrucción Criminal, tenía las siguientes connotaciones:

1. **Para los delitos graves:** Existía la Corte de Assises, la cual estaba conformada por el Tribunal compuesto por un Presidente y cuatro (4) Conjueces Técnicos de Derecho. Se convocaba a un jurado popular. Al Tribunal le competía el problema del derecho, al jurado el problema fáctico o de los hechos. Además, existía una cámara de acusación con las atribuciones del Ministerio Público Moderno.
2. **Para los delitos de menor gravedad:** Contaban con Tribunales correccionales de distrito, integrados por tres Jueces Técnicos, cuya función era resolver los casos en los cuales tenía competencia de conocer las faltas o contravenciones de gravedad mínima.

Tenía una fase inicial de instrucción con características propias del sistema inquisitivo, ya que era escrito y secreto, dirigido por un Juez, figura principal del proceso y ante quien participaba el representante del Ministerio Público.

Seguía una fase intermedia, en la cual los resultados de la instrucción eran puestos a consideración de la Cámara de Consejo, que era un Tribunal

compuesto por Jueces Técnicos donde se decidía la acusación, se daba por agotada y se clausuraba el proceso si no había suficientes pruebas, si estas eran suficientes entonces se enviaba el proceso a la Cámara de Acusación, quien a su vez decidía llamar a juicio, que era la tercera etapa. Este juicio era oral, público y contradictorio, rasgos propios del sistema acusatorio. A la vez que, al sumariado se le intimidaba con el hecho acusado, igualmente, se le ofrecía todas las oportunidades para su defensa, sino contaba con un defensor, el Estado le asignaba uno de oficio. El fallo de culpabilidad lo emitía el jurado por medio de votos y con mayoría simple.

En relación con las pruebas, este sistema mantuvo la prueba legal predeterminada, así como la libre convicción de valoración de esta, siempre que fuera introducida legalmente al debate, si esta se recababa en la instrucción de carácter preparatorio debía presentarse en la fase oral y pública, ya que entonces no podía constituirse en prueba sobre la cual se emitiría un fallo definitivo.

Este Código tuvo mucha influencia en Europa Continental y en Latinoamérica. Manzini redactor del Código Italiano de 1930 introduce algunos cambios, pero es, esencialmente, el sistema procesal clásico, que luego sirve de modelo al Código de Córdoba, Argentina en 1839. Este modelo también fue seguido por Costa Rica en 1975.

España, también se inspiró en el Código Napoleónico, en sus normas de enjuiciamiento de 1872 y 1882 que, igualmente, ejercieron influencia en los Códigos Latinoamericanos.

2.1.11. El Sistema Procesal Mixto Moderno

El antecedente del cual surge el Sistema Procesal Mixto Moderno, fue lógicamente, el mixto clásico, el cual nació con la Revolución Francesa, pero se cristalizó en el Código de Instrucción Criminal de 1808. Con este modelo imperaba en Francia una monarquía absoluta en manos del Monarca. La fuerte oposición de grandes pensadores logró al fin su objetivo, imponer nuevamente, las características del sistema acusatorio.

Al lograr cambios judiciales permitió que se aplicara lo que hoy se conoce, como debido proceso, porque el ciudadano estaba desprotegido y sus derechos eran viciados. Así, al encargarse el Gobierno Revolucionario de 1871 se plasman todos estos cambios en el sistema penal.

Francia logró proyectar, en Europa Continental, incluyendo España y los países latino americanos que, para el siglo XIX ya estaban independizados de España, las transformaciones en su derecho penal y fueron redactando sus respectivos cuerpos de leyes, pero teniendo como ejemplo el Código de Instrucción Criminal Francés de 1802, las de enjuiciamiento Española de 1872 y 1882 y el Código Italiano de 1830. Argentina en 1832 elabora su Código Procesal Penal basado casi, idénticamente, en el Código Italiano, este modelo también fue copiado por Costa Rica, en su Código de Procedimientos Penales de la República de Costa Rica en 1972 casi ciento cuarenta años después.

Al analizar el Código Francés, se observa que el Sistema Procesal Mixto Moderno, mantiene dos (2) etapas o fases principales en el proceso: “la primera, de carácter inquisitivo, conserva la escritura en los actos procesales, su relativo

carácter secreto y la no contradictoria; la segunda, de naturaleza acusatoria, se caracteriza porque en ella rigen rasgos fundamentales de oralidad, publicidad y contradicción” (Peña S., 1996, pág.47).

De esa misma forma el profesor Carlos E. Muñoz Pope al referirse a este tema, señala, “la etapa sumarial sigue siendo escrita y secreta en contraposición con la etapa del juicio, que es oral y pública. Las pruebas recabadas en la etapa sumarial fundamentan la acusación, pero la condena del procesado dependerá de la prueba practicada en juicio oral, de frente al juez y con plena garantía de defensa de interrogar y contradecir la prueba de cargo” (Muñoz P., 2004, pág. 19).

2.1.12. Principios fundamentales del sistema procesal mixto moderno.

A lo largo del estudio se ha dicho que el Sistema Procesal Mixto Moderno, recoge principios del sistema acusatorio y del sistema inquisitivo, que según el Doctor Luís Paulino Mora Mora sus principales características son las siguientes:

- a) Principio de oficialidad:** La realización de la justicia no debe dejarse en manos de los particulares, es una función eminentemente estatal.
- b) Principio de oficiosidad:** Un organismo del Estado es el encargado de excitar la acción penal. Actúa de oficio al conocer por cualquier noticia, denuncia, llamada, etc.
- c) Principio de legalidad:** No se trata de legalidad del derecho sustantivo, es a partir de la legalidad en cuanto a oportunidad o discrecionalidad. De tal manera, encontrándose presente las condiciones mínimas exigidas por

la ley para la configuración de un delito, los entes encargados, están obligados a promover y ejercer la acción penal hasta su agotamiento. El otro aspecto es que si estos personeros de la acción penal, se percatan en las averiguaciones que, el hecho no constituye delito, no puede ordenar el archivo del sumario sino que, debe incoar el órgano jurisdiccional competente para que se pronuncie al respecto.

d) Principio de la verdad real o material: Es un principio muy interesante, toda vez, que la finalidad de todo proceso penal es que se realice la justicia, lo que va muy ligado a la búsqueda de la verdad.

e) Publicidad en el debate: Principio característico del sistema acusatorio, que ofrece un medio directo de participar y controlar popularmente el proceso. En el sistema mixto moderno, se considera que la fase de instrucción es parcialmente pública; pues, al proceso solo tienen acceso las partes, legalmente, procesadas, sin embargo, el funcionario de Instrucción puede declarar la privacidad de este, cuando la investigación peligra. El debate, en cambio, debe ser público bajo pena de nulidad. Pero, por razones de moralidad o de orden público, puede declarar que se realice de forma privada, parcial o total de la audiencia.

f) Libertad de prueba: En el proceso penal, puede probarse o por cualquier otro medio, el hecho tomado en consideración la licitud de la obtención de la prueba, tal como lo establecen las limitaciones y prohibiciones de la ley, ya que toda prueba recabada, ilícitamente, es nula para sustentar un fallo en el estricto derecho.

g) Principio de impulso e investigación judicial autónoma: Se destaca la división de poderes y funciones estatales. Corresponde al poder judicial el conocimiento, investigación y resolución de los conflictos entre los ciudadanos. En este sistema penal, este sub-principio toma vigencia en cuanto que el Juez instado por el acusador oficial, el Ministerio Público está en el poder-deber de abocarse al mismo.

h) Comunidad de prueba: Todo elemento probatorio debe ser propuesto por el Ministerio Público, la defensa o cualquiera de las partes del proceso debe ser común a todos los sujetos que integran la relación procesal; lo que significa, que por renuncia de las partes, ninguna prueba relevante puede dejar de valorarse.

i) La sana crítica racional o libre convicción: Alfredo Vélez Maricondo, tratadista Argentino dice: "Mediante la sana crítica racional, el Juzgador está sujeto a las reglas del correcto entendimiento humano, entendiéndose por tales la lógica, la psicología y la experiencia común" (Velez M., 1969, pág. 69).

j) El Indubio Pro-Reo: Cuando el Juez valora la prueba, puede encontrarse al final del estudio del proceso con tres situaciones: Certeza, duda y probabilidad. La doctrina ha determinado que sólo en la primera, el Juez está listo para fundamentar una resolución condenatoria; pero, en las dos (2) últimas no se registran suficientes méritos para condenar. De tal manera, la aplicación de este principio se refiere a elementos de convicción positivos o negativos, pero de hecho, no de derecho.

k) Principio de la inviolabilidad de la defensa: La evolución del Derecho Penal y Procesal Penal Moderno, busca transformar al acusado de objeto a auténtico sujeto del proceso, sobre esta base, es perseguido penalmente, es titular de una serie de garantías que todo estado de derecho debe respetar, es así que el imputado, no puede ser coaccionado, por ningún medio y ninguna circunstancia, para no vulnerar ese instituto constitucional de presunción de inocencia a su favor.

l) Intervención: Todas las partes tienen la posibilidad de intervenir en el Proceso Penal, siendo la más indispensable y necesaria la del Ministerio Público. En el Sistema Penal Mixto Moderno, no existe en principio, el juicio en rebeldía, pero obliga al imputado a comparecer a toda situación que se le haga; por ello, su participación se hace necesaria.

Es interesante que, en este Sistema, el civil responsable que puede ser, independientemente, el imputado o bien otra persona, debe ser citado y notificado como cualquier demandado civil en causa privada, lo mismo el actor civil cuando se ha constituido, en ese sentido, últimamente los abogados están haciendo uso de esta intervención y la legislación actual lo establece en los artículos 1969 – 1981 del Código Judicial. Esta incidencia, muchas veces no se hace dentro del proceso penal, porque su petición no paraliza el mismo, ni deja sin la posibilidad de accionar ante el Juez Civil para la indemnización respectiva.

m) Contradicción: La contradicción es un elemento indispensable, pues en primer lugar significa que las partes (acusador o acusado), deben ser

oídos por el juez. Según Alfredo Vélez, es también un mecanismo de control de las partes hacia el juez y de las partes entre sí.

- n) Imputación:** El acusado no puede ser perseguido, “ex officio” por lo tanto, el órgano público acusador debe formular una clara acusación, para que el Juez pueda abocarse al conocimiento de este.

La acusación del Ministerio Público, debe contener una identificación del imputado, es decir, individualizar a las personas por sus cualidades generales o por datos objetivos que sirvan para identificación: relación circunstancial del hecho, requisito esencial, ubicar el lugar, tiempo, modo en que se realizó el hecho. Cuando se trate de varias conductas debe relatar, separadamente, cada hecho. En la calificación legal se debe determinar qué delito se ha cometido y enmarcarlo en la norma respectiva; exposición breve de los motivos en que se fundamenta la acusación, exponer sucintamente los motivos de hecho y de derecho que lo determinan para formular la acusación y la verdad. Por la brevedad de los términos, la ley obliga al funcionario instructor evacuar aquellas diligencias y pruebas que estime importantes.

- o) Ampliación de la imputación e intimación complementaria:** Si la ley prevé que la imputación pueda ser ampliada en el curso de la fase de juicio se debe hacer la imputación e intimación complementaria, para no violentar el principio de defensa.

- p) Correlación entre acusación y sentencia:** El propósito de este postulado es, impedir que el acusado sea condenado por hecho distinto al

que le fuere imputado e intimado. De tal modo, que debe mediar una correlación esencial entre la acusación y la sentencia dictada.

La correlación entre la acusación y la sentencia se refiere a los aspectos y elementos eficientes que son relevantes para un juicio de culpabilidad del imputado. La falta de correlación se da cuando el juzgador considera en la resolución un hecho no contenido en la acusación o por el contrario, toma en consideración otro hecho no contenido en ella.

q) La reparación del daño: Se contempla la posibilidad que el afectado por el delito en un proceso penal, reciba la indemnización del daño material o reparación del agravio moral que se haya dado.

r) Fundamentación de la sentencia: La sentencia debe fundamentarse, exclusivamente, en elementos probatorios que hayan sido evacuados en el debate de la fase oral y pública.

La fundamentación de la sentencia constituye un requisito importante, toda vez, que causa nulidad de la misma se indican las razones y el sustento probatorio de cada conclusión.

Como quiera, que el derecho penal es público y ese mismo carácter le induce a defender los derechos de la sociedad; en general, sus intereses y no la del particular, que por la trascendencia de sus conflictos el juzgador tiene que llegar al fondo del asunto hasta sacar a la luz de la verdad histórica del hecho acaecido, él no puede conformarse

con lo que le han llevado las partes, sino que puede desplegar toda una labor oficiosa para encontrar la verdad del hecho bajo su conocimiento.

Este principio tiene un gran alcance, pues le ha quitado valor sobre la verdad material suficiente a la confesión del imputado que se consideraba “la reina de la prueba”, este tiene mucha razón de ser, pues la experiencia ha demostrado que en muchos casos el imputado confiesa la comisión de un delito para encubrir a un pariente cercano, o bien bajo coacción o amenaza, situación que ha obligado a un juez penal a descartar o comprobar mediante una investigación de fondo y así lograr una buena administración de justicia.

s) Principio de inmediación: Este postulado significa que todos los medios de prueba deben ser puestos en conocimiento de los sujetos procesales en forma directa y simultánea. De ellos el juzgador, sobre todo, debe entrar en ese conocimiento sin intermediarios.

2.2. Marco Conceptual

En esta investigación, consideramos indispensable la definición de los siguientes conceptos, con el fin de ilustrar al lector:

Acción penal: La que se ejercita para establecer la responsabilidad criminal y, en su caso, la civil, ocasionada por la comisión de un delito o falta. La determinación de quienes ejercitan esta acción constituye uno de los temas más debatidos en el Derecho Procesal Penal, y se resuelve por diversas legislaciones.

Audiencia preliminar: Esta nueva forma de juicio oral busca una calificación rápida del sumario, en presencia de todas las partes involucradas. Previa a esta audiencia preliminar si el Juez considera que la calificación que procede pueda ser una ampliación, un sobreseimiento, suspensión condicional del proceso, archivo del proceso o declinatoria de competencia lo hará sin necesidad de hacer audiencia preliminar. Se quiere hacer esta acotación porque al entrar en vigencia la ley 1 de 3 de enero de 1995, en la práctica tribunalicia se forzaba a la celebración de una audiencia preliminar para hacer esta calificación.

Audiencia abreviada: Existía antes de la Ley 1 de 3 de enero de 1995, en los asuntos civiles y laborales, no así en el penal en donde prevalecían las audiencias ordinarias, que se celebraban después de un encauzamiento contra la persona investigada, es decir, la etapa plenaria, con términos dilatadores que hacía evidente el paso lento de la Justicia.

Agente del Ministerio Público: Funcionario encargado de defender los derechos de la sociedad y del Estado. También se le denomina, Fiscal, Personero, Agente de Instrucción, Funcionario de Instrucción, Juez de Instrucción.

Auto de procesamiento: La resolución judicial por la cual se declara procesado, al presunto culpable de un delito, teniendo en cuenta los indicios racionales de criminalidad contra él. En lenguaje común se le denomina llamamiento a Juicio, Auto Calificatorio, Auto Encausatorio.

Carta Magna: La denominación se estila con preferencia en los casos en que los soberanos absolutos se deciden a adoptar una apariencia de poderes compartidos y garantías cívicas. Sinónimo de Constitución Política.

Confesión simple: Quien la formula declara lisa y llanamente un hecho interrogado por la parte contraria o por el Juez.

Imputado: Persona determinada de haber incurrido en una infracción penal. También es llamado sumariado, investigado, sindicado, procesado, justiciable.

Juicio: Por juicio se entiende la controversia que, con arreglo de las leyes, se produce entre dos o más personas ante un juez competente, que le pone término por medio de un fallo que aplica en Derecho o impone una pena, según sea el de enjuiciamiento, civil o penal.

En el ámbito penal, el que tiene por objeto la averiguación de un delito, el descubrimiento del que lo ha cometido y la imposición de la pena que

corresponda (o la absolución del acusado). El juicio penal tiene dos periodos: el de sumario, en el que se hace la instrucción de la causa, y el de plenario, que termina con el juzgamiento propiamente dicho.

Mora judicial: Dilación, lentitud o atraso en los trámites judiciales.

Parte en el proceso: En noción preliminar, el litigante por iniciativa propia o por impugnación de una acción ajena contra él, sea demandante o actor, sea demandado o reo y también en el proceso criminal el querellante y el acusado. El representante del interés público en una causa o Ministerio Fiscal.

Proceso penal: El que tiene por objeto la averiguación de un delito, el descubrimiento del que lo ha cometido y la imposición de la pena que corresponda. Es denominado como Juicio Criminal, Juicio Penal por otras doctrinas.

Proceso: En sentido amplio equivale a juicio, causa, caso, pleito o negocio. En un sentido más restringido, el expediente, autos o legajos en que se registran los actos de un juicio, cualquiera que sea su naturaleza.

Sistema acusatorio: En el procedimiento penal, el que obliga al juzgador a decidir según los resultados de la acusación pública o privada y de la controversia mantenida con la defensa, salvo especial informe solicitado de las partes sobre actos, omisiones o circunstancias no tenidos en cuenta por ellos.

Sistema inquisitivo: El enjuiciamiento criminal de otros tiempos en que el Juez pertenecía a la iniciativa probatoria y la discrecionalidad punitiva,

incluso sobre el rigor de la acusación pública o privada, y hasta prescindiendo en absoluto de una y otra.

Sistema mixto: Se conjuga tanto el Sistema Acusatorio como el Inquisitivo. El Proceso penal tiene dos (2) etapas.

La instrucción (Investigación)/ Sistema Inquisitivo.

El Juicio oral o juzgamiento / Sistema Acusatorio.

Sistema acusatorio moderno: El Órgano Jurisdiccional se activa ante la acusación de un ente ajeno a la administración judicial (Ministerio Público) al producirse un delito. El Ministerio Público está a cargo de la etapa de la investigación.

2.3. Marco Teórico

2.3.1. El Sistema Acusatorio Moderno.

2.3.1.1. Generalidades.

El Sistema Procesal Acusatorio que influye hoy, en la mayoría de las legislaciones americanas de habla hispana, tiene su génesis y su consagración a partir del Segundo Congreso Latinoamericano de Criminología reunido en Santiago de Chile en 1941, en la cual unas de sus partes declara lo siguientes:

“Que las leyes de carácter procesal penal deberán dictarse procurando armonizar el interés individual con el social, entre las medidas generalmente acogidas y que informan los trabajos presentados al Congreso, es propicia la adopción de lo siguiente:

1. Creación de un Ministerio Público con intereses individuales, o de Defensa, como el órgano que en el proceso criminal asuma el patrocinio del inculcado y del acusado para hacer valer sus derechos;
2. supresión en aquellos países en que exista, de la confusión en un mismo funcionario de las actividades de Instructor, Acusador y Juzgado del proceso penal;
3. división del proceso penal en una etapa de instrucción y otra de juzgamiento, sobre la base de la acusación por el Ministerio Público, ambas etapas deben encontrarse a tribunales diferentes;
4. propiciar la organización del Ministerio Público, con tanta amplitud como fuere preciso, a fin de obtener la concentración de dicho órgano, de los poderes de iniciar la causa y deducir acusación, en todo proceso de acción pública, y
5. extender el recurso de Casación en materia penal, a la infracción de las leyes reguladoras de la prueba cuando no haya intervenido Jurado, para el establecimiento de los hechos”.(Zavala L., Pág. 111)

Esta corriente se afianza con la aprobación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, celebrada en San José, Costa Rica el 22 de

noviembre de 1969; la cual establece en su Artículo 7 numeral 5, que “toda persona detenida o retenida debe ser llevada, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable”.

Más tarde, el Instituto de Derecho Procesal elaboró en junio de 1988 el Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, que después fue incorporado por los Estados de Iberoamérica a sus legislaciones, dicho Código fue adoptado precisamente, en la V Jornada de Derecho Procesal, celebrada en Bogotá y Cartagena del 20 al 27 de junio de 1990. La principal fuente de inspiración habría de ser el Código Procesal de la Provincia de Córdoba, Argentina.

La República de Panamá mediante ley 15 de 28 de octubre de 1977, aprobó la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, fuente de inspiración, para aprobar la Ley 21 de 10 de diciembre de 1993. En la cual se establecen dos (2) comisiones encargadas de elaborar los Anteproyectos de Código Procesal Penal y el Código Penal de 1997, en el que se acoge un proceso penal más garantista con la existencia de normas procesales “que no sólo tienen vigencia por cuanto existen dentro de un determinado contexto jurídico sino que además, por cierto, requieren de la validez del mismo en atención no solo a la forma, sino a la sustancia que las mismas expresan en atención a los fines a que está orientado ese moderno artificio que es el Estado Constitucional de Derecho” (Muñoz P., 2004, Pág. 30).

Estas dos (2) herramientas jurídicas tienen como reto frenar la delincuencia, el hacinamiento carcelario; con instrumentos distintos, a los Códigos vigentes, cuyas concepciones datan del siglo XIX.

En los últimos años, en la República de Panamá, se ha tratado de establecer un modelo procesal garantista, como una de las bases fundamentales del Estado de Derecho ya que la justicia panameña, según la doctora María Poza Cisnero “tiene resabios inquisitivos y su estructura no garantiza la igualdad de partes, donde las investigaciones que efectúa el Ministerio Público, motiva que los jueces decidan sus sentencias fundados en el contenido de los expedientes, en vez de tener contacto directo con los testigos. Eso perjudica la visión de la realidad, debido a que los jueces no tienen la forma de percibir si un testigo miente o no miente. Es mejor cuando la justicia se administra cara a cara” (Poza C., 1999)..

2.3.1.2. Principios del Sistema Acusatorio Moderno.

El nuevo Sistema Procesal Acusatorio se desarrolla, mediante una serie de principios rectores y garantías procesales, para que las partes intervinientes, ya sea el que investiga y acusa, y la autoridad jurisdiccional que decide, adelante el proceso sin dilación. Estos principios rectores y garantías procesales, se encuentran recogidos en el Anteproyecto de Código Procesal Penal, la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, suscritos por la República de Panamá.

a) Libertad

Toda persona tiene derecho a que se respete su libertad. La Constitución Nacional en su artículo 24, promueve este principio indicando: “Nadie puede ser privado de su libertad, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, expedido de acuerdo con las formalidades legales y por motivo previamente definido por la Ley”.

De esa misma forma, el Código Judicial vigente recoge este principio en el artículo 1942 indicando “Toda persona tiene derecho a su libertad personal y frente a toda denuncia se presume su inocencia”. Además, el anteproyecto de Código Procesal Penal establece en su artículo 7 que “Toda persona tiene derecho a que se respete su libertad ambulatoria y su seguridad personal. Nadie debe ser molestado en su persona o familia, ni privado de su libertad ni su domicilio registrado, sino por mandamiento escrito de la autoridad judicial competente, previo cumplimiento de las formalidades legales y por motivos definidos en la ley”.

Las normas aludidas son concordantes al señalar como derecho fundamental de especial tratamiento por el sistema judicial, resaltando que, la ritualidad inquisitiva restringe sin mayor preocupación la libertad del individuo, para que en etapas posteriores, se establezca si se dio la comisión de un delito y si el privado de libertad es autor o partícipe del mismo.

En el nuevo Sistema Acusatorio de corte garantista, la restricción de la libertad de una persona solo podrá ser dispuesta por el Magistrado o Juez de Garantías, previa solicitud de la Fiscalía y siempre que sea necesaria para la

comparecencia del imputado al proceso, y así para preservar la existencia de una prueba, para la protección de la sociedad o las víctimas del hecho punible (ver art. 535 y 552 del Anteproyecto de Código Procesal Penal). Surge entonces, la figura del Juez de Garantías cuyos presupuestos para su actuación han sido fijados por la ley.

En un Sistema Mixto-Inquisitivo se restringe la libertad del imputado como si de esta dependiera la calificación de la eficacia de la justicia. En innumerables casos, la detención preventiva supera la pena impuesta al delito que se imputa, violando derechos y garantías fundamentales y legales, como si se aplicara un castigo anticipado por una presunta conducta punible que al término del proceso resulta inexistente, o en el peor de los casos, no existe relación entre el imputado y el delito que se le atribuye.

b) Prelación de los tratados internacionales.

Los tratados y convenios internacionales firmados y ratificados por el estado que versen sobre Derechos Humanos prevalecerán, sobre la ley existente en el país. De esa forma, lo recoge el texto constitucional en su artículo 4 señalando que, “La República de Panamá acata las normas del Derecho Internacional”.

c) Igualdad.

Los textos constitucionales y legales existentes garantizan la igualdad de las personas ante la ley, sin que por razones de raza, sexo o condición social, discapacidad, religión o ideas políticas puedan existir privilegios de ninguna índole.

Ese mismo precepto lo recoge el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos cuando señala “Toda las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”.

Esa misma Convención sobre Derecho Humanos indica: “Todas las personas son iguales ante los Tribunales y Cortes de Justicia”. Este precepto internacional tiene relación con el acceso a la justicia en igualdad de condiciones, sin privilegios de ninguna índole, en concordancia con el artículo 20 de la Constitución Política de Panamá.

Para Nelson Delgado Peña, la igualdad de las partes, principio que “asegura al justiciable la igualdad de oportunidades en el proceso y de trato en las actuaciones y gestiones del procedimiento legal” (Delgado P., 2005, pág. 35).

El acceso de la justicia en igualdad de condiciones es el fondo del principio, pues la condición social y económica no debe ser obstáculo para que el aparato judicial determine el tratamiento a la parte que acusa o exige de un proceso justo.

d) Imparcialidad.

En el nuevo Sistema Acusatorio con corte garantista, la principal característica es la posición objetiva e imparcial del juzgador, que no tiene que calificar la correspondiente formulación de cargos que hace el Ministerio Público en contra del imputado y las constancias procesales que sirven de sustento a tales cargos.

Pues, ahora no será el juzgador quien formule los cargos contra el imputado ni dicte el enjuiciamiento contra el mismo, pues con el nuevo texto, actualmente, en proyecto, basta y sobra que el Juzgador admita la acusación del Ministerio Público para que la causa sea elevada a otro Juzgador, quien dirigirá todo el juicio oral.

El principio de imparcialidad se relaciona con las funciones de control de garantías y de juzgamiento en que los jueces se centren en establecer la verdad e impartir decisiones justas.

Sostiene Nelson Delgado Peña que “En el modelo acusatorio desaparece la marcada tendencia inquisitiva, donde el Ministerio Público cumple la función de investigar y juzgar la conducta del imputado, pues en cumplimiento de un deber social que a todas luces debe justificar, valorar y calificar la conducta investigada con base en las diligencias que este mismo practica, constituyéndose en juez y parte, por lo que la imparcialidad brilla por su ausencia”. (Delgado P. 2005. pág. 36)

Sostiene el mismo autor que la “subordinación y dependencia de los funcionarios implica la parcialidad en muchas de sus decisiones, dejándolos desprovistos de toda razonabilidad en evidentes desventajas del enjuiciado, quien además, debe soportar decisiones formateadas de modelos casi genéricos. Es que los jueces como operadores del poder del Estado pueden engendrar toda clase de persuasiones para lograr imponer criterios o voluntades parcializadas. La parcialidad de la justicia genera desconfianza en la sociedad que incólume acude como lo hemos mencionado, a la autojusticia,

a la inseguridad, a la violencia social. El comportamiento de los ciudadanos no corresponde a las órdenes de los tribunales de justicia, y si lo hacen, es con recelo o resistencia. (Delgado P. 2005. pág. 36)

En el Sistema Acusatorio, la verdad y la justicia son los ejes centrales del juez investido del control de garantías y de juzgamiento, es decir, es ajeno e imparcial a los hechos que se investigan, permitiendo que las partes (acusado o fiscal y defensa) sean las que procuren los medios de pruebas y contrapruebas para conducir a la convicción de juzgador.

e) Legalidad

Nadie podrá ser penado por un hecho que se haya declarado como punible por una ley anterior a su perpetración y, exactamente, aplicable al acto imputado.

Este principio lo recoge el artículo 31 de la Constitución Política de la República de Panamá, además en el artículo 32 se garantiza el debido proceso.

Pero, la génesis de este principio se encuentra en la fórmula *nullum crimen sine lege*.

La inspiración de estos principios y garantías se fundamenta en normas internacionales que han plasmado instituciones y organizaciones con reconocimiento transnacional, así como la declaración de los Derechos del Hombre de 1789, que proclamó: "Nadie podrá ser castigado sino en virtud de una ley establecida promulgada con anterioridad al delito y legalmente aplicada".

f) Presunción de inocencia e in dubio pro reo

La presunción de inocencia es una garantía procesal recogida en las Constituciones Políticas y Declaraciones Internacionales de los Derechos Humanos, por lo que, todo imputado no puede ser declarado culpable hasta tanto no se dicte en su contra sentencia definitiva de condena en relación con los delitos que se le atribuyen.

Según los estudiosos del derecho, este principio, tiene su génesis en la ley de Lynch, atribuida a Charles Lynch (1736-1796) colono de paz de Virginia, Estados Unidos, quien empleaba métodos extralegales de juicio y castigo; fue amnistiado en 1782 por la Asamblea de Virginia.

Para el profesor Jairo Parra Quijano, la presunción de inocencia, “es aquella por medio de la cual se ordena tener a toda persona como inocente, hasta que no se acredite el hecho punible y la responsabilidad, mediante un proceso celebrado con todas las garantías” (Parra Q., 2002, pág. 52).

Además este autor, enumera una serie de circunstancias que indican que este principio universal es una verdadera presunción y como se originó.

Señalando entre los más relevantes los siguientes:

1. Que por la experiencia y observación la mayoría de los hombres no delinquen.
2. Que el hombre se forma desde que nace y se relaciona con el ambiente y otros hombres, por lo que recibe una formación de la mayoría de no delinquir. De esto se concluye que si la norma es que el hombre no

delinca, se debe tener construida la inocencia y no la sospecha o la culpabilidad.

3. Es una verdadera presunción "iris tantum", es decir, que admite prueba en contrario, a veces en forma provisional y otras en definitiva.
4. Es una presunción que ejerce regencia, porque aunque el Juez, mediante su conocimiento no puede privarlo mientras no conozca aspectos de la persona, es decir, no puede utilizarlos por la presunción de inocencia.

Se puede decir, en consecuencia, que este principio, nacido como una reacción ante los abusos de la Inquisición (como modelo de proceso penal arbitrario), forma parte de la conciencia universal acerca del valor de la persona aunque ello, de ninguna manera, quiere decir que tenga una efectiva vigencia en nuestro país. Ahora la culpabilidad no es construida con certeza, aflora la situación básica de libertad.

La primera derivación de esa garantía –que, al mismo tiempo, es uno de sus fundamentos políticos- es el mandato constitucional en que nadie puede ser considerado culpable sin una sentencia, obtenida en un juicio que lo declare como tal. Por imperio constitucional, toda persona es inocente, y así debe ser tratada mientras no se declare en una sentencia judicial su culpabilidad.

Juicio previo y principio de inocencia son dos caras de una misma moneda y por tal razón, se han destacado como garantías básicas del proceso penal. A partir de ellas y sobre ellas comienza a construirse el escudo protector

frente al poder arbitrario, que es el cometido de todas las garantías dentro del proceso penal.

Se ha dicho que este principio implica un "status de inocencia", una "presunción de inocencia", o un "derecho a ser tratado como inocente". Pero que en definitiva todas estas posturas son perfectamente conciliables y no difieren en sus efectos prácticos.

Florián citado por Tiberio Quintero Ospina nos dice "...muy a menudo la presunción de inocencia puede descartarse y eliminarse, pues que todos los días se presentan casos de acusados varias veces reincidentes o confesos, o de reos delatados por pruebas materiales inmediatas o denunciados por su misma captura en el momento del crimen, *deprehesio in crimine*. Ahora bien, todo esto no se relaciona con ninguna presunción, sino que, por el contrario encierra elementos de pruebas que manifiestan desde el comienzo y que revelan un estado de hecho desfavorable al acusado. Aquí la presunción de inocencia está ausente, no por razones teóricas sino de hecho, o por lo menos tal presunción se ve rápidamente eliminada por elementos adversos" (Quintero O., 1990, pág. 448).

En el proceso penal garantista de corte acusatorio las actuaciones primarias le incumben al acusador, porque al presumirse la inocencia del imputado, es a aquel a quien le corresponde desvirtuar con prueba de cargo que conduzcan a una razón fundada en que, al imputado se le puede atribuir responsabilidad respecto del delito que se investiga.

Si el Ministerio Público no prueba su acusación, el Juzgador carecerá de facultades que impliquen el ejercicio de la acción penal para producir por su propia cuenta las pruebas que le permita dictar sentencia condenatoria contra el procesado (Ver art. 20 del Anteproyecto de Código Procesal Penal).

A pesar que el imputado no está obligado a probar su inocencia porque esta se presume, tampoco se le veda el derecho de acudir a diversos medios de descargo para que desvirtúe las pruebas de cargo que pretende enervar la presunción de inocencia.

La Constitución Política de la República de Panamá recoge este principio en el artículo 22 y lo desarrolla el Código Judicial en el artículo 1942:

Constitución Política de Panamá

“Artículo 22: Las personas acusadas de haber cometido un delito tienen derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad en un juicio público que le haya asegurado toda las garantías establecidas para su defensa...”.

Código Judicial

“Artículo 1942: Toda persona tiene derecho a su libertad personal y frente a toda denuncia se presume su inocencia”.

Por otro lado, el Anteproyecto de Código Procesal Penal lo establece en su artículo 17 cuando señala: “El imputado debe ser tratado como inocente durante todo el proceso hasta tanto se declare responsable del delito que se le imputa en sentencia que haga tránsito a cosa juzgada”.

Ahora bien, en cuanto al principio *in dubio pro reo*, que no es más que una locución latina que significa en la duda se favorece al reo, se resume el principio de favorabilidad del inculpaado cuando el Juez no tenga suficientes

elementos de juicio, según los hechos probados, para sustentar fehacientemente su sentencia; le impone al juzgador su absolución.

Según el Doctor Carlos H. Cuestas G. "El principio se remonta al Derecho Romano pues los juristas Ulpiano, Pomponio, Gayo y Paulo en muchos de sus escritos recomiendan al Juez proferir la salvación de un culpable antes que la condena de un inocente. Este principio se recoge, también en la legislación procesal que establece que toda norma legal que limita la libertad personal, el ejercicio de los derechos de los sujetos del proceso o que establezcan sanciones procesales será interpretada restrictivamente" (Cuestas G., 2000).

El principio *In dubio Pro Reo*, significa que en caso de duda hay que preferir absolver a un culpable que condenar a un inocente.

La base de este principio descansa en el interés y la tutela del inocente prevalece sobre el interés en la condena del reo.

José Cafferrata Nores sostiene que, "La duda que al comenzar el proceso tiene poca importancia, va cobrándola a medida que avanza, aumentando el ámbito de su beneficio, hasta llegar a la máxima expresión de su alcance en el dictado de la sentencia definitiva" (Cafferrata N., 1994, pág. 10).

Este principio consagra que al momento de dictar sentencia, deba aplicar el criterio más favorable al reo y es cuando se evidencia con toda su amplitud el principio desarrollado; pues, las normas penales podrán ser

aplicadas, retroactivamente, cuando supriman, aminoren una pena o de cualquier forma fuesen favorables al reo.

g) Defensa

El derecho a defensa es indispensable para cumplir el principio fundamental del debido proceso. La defensa técnica es ejercida una vez se adquiere la condición de imputado, y según el derecho positivo vigente (artículo 2006 del Código Judicial), ésta se adquiere cuando se es sindicado como autor o partícipe de un delito o toda persona contra la cual se formalice querella.

En el Sistema Procesal Acusatorio, la defensa técnica es ejercida una vez se adquiere la condición de imputado, que le es notificada en audiencia de formulación de cargos ante el Juez de garantías.

El procesado tiene derechos dentro del juicio cuando la Fiscalía le formule la acusación, estos son: no ser obligado a declarar contra si mismo o contra su cónyuge, o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; ser asistido, gratuitamente, por un abogado; tener comunicación privada con su defensor antes de asistir a una autoridad; disponer de tiempo para preparar su defensa; solicitar, conocer y contravenir las pruebas; a tener un juicio público, contradictorio, concentrado, imparcial y sin dilación.

El derecho a defensa es una garantía que tiene rango constitucional, en virtud del cual, toda persona acusada por un delito tiene derecho a ser asistido por un abogado; y con el ánimo de que todo ciudadano nacional o extranjero pueda acceder a la justicia bajo el principio de igualdad, el Estado proporciona

mediante el Instituto de Defensoría de Oficio, a los profesionales del derecho para que asistan a las personas que no puedan sufragar un abogado.

La Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su artículo 10 que toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia, por un Tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

En esa misma concepción lo recoge el Anteproyecto de Código Procesal Penal al establecer en su artículo 4: “Ninguna persona podrá ser juzgada sino por autoridad competente previamente establecida, conforme al trámite legal y con plena garantía de su defensa”.

h) Oralidad

La oralidad es la principal característica dentro del proceso penal acusatorio modelo garantista, ya que todas las actuaciones serán esencialmente orales y se utilizarán los medios tecnológicos necesarios que proporcionen agilidad y fidelidad, sin perjuicios a que se registren las actuaciones de los intervinientes y de lo ocurrido durante las audiencias públicas, tal como lo señalan los artículos 26 y 41 del Anteproyecto de Código Procesal Penal.

La oralidad facilita la inmediación del Juez con las partes, dejando atrás el formalismo de la escritura, en la cual eran los asistentes quienes resolvían las controversias sin que el Juez natural conociese de los pormenores de la

investigación y sin que llegara a un convencimiento de la responsabilidad del acusado.

Con la oralidad del juicio penal, la libre apreciación de la prueba es la esencia del proceso, porque el Juez está, en contacto directo con las fuentes y los medios de pruebas; además, valora al testigo que se le presenta y observa los interrogatorios efectuados por el acusador y la defensa; su forma de responder, el tiempo de sus respuestas, sus gestos, sus miradas y demás aspectos físicos externos que no solo el Juez sino las partes intervinientes y el público pueden valorar.

i) Derechos a las víctimas.

Las víctimas del delito, son las personas naturales o jurídicas que hayan sufrido menoscabo o daño, como consecuencia de la comisión de un hecho punible. Son de singular importancia porque intervienen aportando pruebas u obligaciones y ellos determinan en el evento de que, el imputado pretenda la aplicación del principio de oportunidad.

Se les garantiza a las víctimas el acceso a la administración de justicia conforme a las normas de procedimiento las cuales establecen que, las víctimas tienen derecho a recibir un trato humano y digno, a ser escuchadas e intervenir en el proceso como querellante, a recibir información sobre el estado de su proceso y ser asistida en la reparación integral.

En ese orden de ideas se expresa Nelson Delgado Pena al señalar que “es notoria la inserción del respeto a los derechos de las víctimas de la conducta delictuosa, pues nadie mejor que quien resulta afectado por el delito,

tenga la posibilidad de acceder al proceso aportando pruebas, exponiendo las lesiones sufridas, los perjuicios ocasionados, aportando información conducente al esclarecimiento de la verdad material, pero por sobre todo, a estar enteradas e informadas del desarrollo del proceso para proteger sus intereses bajo el principio de igualdad". (Delgado P. 2005. pág. 50)

El Anteproyecto de Código Procesal Penal al referirse al derecho de las víctimas sostiene, en el artículo 21: "La víctima tiene derecho a participar en el proceso penal y a ser informada de sus resultados. La Ley indicará su procedimiento".

En el Sistema Acusatorio de corte garantista, se le confiere a la víctima del delito la facultad de intervenir ante la posibilidad de que el Juez, a petición del Fiscal, solicite la aplicación del principio de oportunidad ante el cumplimiento de los requisitos procedimentales, pues la víctima es la llamada a consentir u objetar la solicitud presentada por el Fiscal para obtener la reparación del daño causado por el delito.

j) Contradicción

La contradicción se caracteriza por ser uno de los principios con más excitación en el sistema acusatorio; pues, la doctrina y los Tratados Internacionales sobre Derecho Humanos han sido unánimes en señalar, que las partes tienen el derecho de conocer y contradecir las pruebas allegadas al proceso, así como a intervenir en su formación, tanto las que sean producidas o incorporadas en el juicio oral y en el incidente de preparación integral.

Para garantizar, plenamente, este derecho, el Juez de garantías ante la acusación formulada por el Fiscal o un querellante deberá poner en conocimiento del imputado todos los elementos probatorios e informes de que tenga noticias, incluidos los que sean favorables al imputado y viceversa.

El Anteproyecto de Código Procesal Penal desarrolla el derecho de contradicción en el artículo 385 cuando establece que, “los medios probatorios están regidos por el principio de contradicción; asegurando, de esta forma, que las partes tendrán derecho a conocer y controvertir las pruebas, así como a intervenir en su formación, tanto las que sean producidas o incorporadas en el juicio y en el incidente de reparación integral, como las que se practiquen en forma anticipada”.

Además, para garantizar plenamente este derecho, en el caso que se investigue a determinada persona, el Fiscal debe informarle sobre tal situación para permitirle la defensa (ver Art. 444 del Anteproyecto).

k) Inmediación

Las pruebas deberán producirse e incorporarse en forma pública, concentrada y sujeta a confrontación y contradicción ante el Juez de garantías. Aquí desaparece la práctica de pruebas por comisión y las famosas pruebas de oficio.

La inmediación permite al Juez un contacto directo con las pruebas; además, las partes demuestran los elementos persuasivos que conduzcan a la convicción del Juez, de la responsabilidad o no del acusado. Por otro lado, se garantiza la imparcialidad del Juzgador, impidiendo de esta forma que,

amañadamente, se presente una valoración probatoria adversa a la realidad demostrada en el juicio.

l) Concentración

La esencia del principio de concentración radica en que todas las pruebas deben solicitarse, practicarse y convertirse en el juicio oral. Sin embargo, pueden darse situaciones que por fuerza mayor o fortuita no se reproducen en el juicio, el Juez admitirá su introducción al proceso siempre que se hayan obtenido con todas las formalidades legales.

De allí, se deduce que la práctica de las pruebas y su debate se desarrollará de forma continua, de preferencia, el mismo día de la celebración del acto oral.

Gran parte de la doctrina sostiene que este principio debe incluirse como “Principio de Continuidad”, aunque la concentración, conlleva la realización probatoria de manera continua.

m) Publicidad

Toda actuación procesal debe ser pública y podrá acceder a ella los medios de comunicación y el público en general, pero por cuestiones de moralidad, orden público, que pongan en peligro a las víctimas, testigos, peritos y demás intervinientes; además, cuando la víctima sea menor de edad, como por ejemplo en los delitos de violación carnal, el Juez podrá ordenar que la audiencia o el acto se celebre a puerta cerrada, solamente con las partes intervinientes.

La garantía de la publicidad del proceso penal encuadra en todos los sistemas de gobiernos democráticos, ya que eso garantiza la participación ciudadana en los actos y se garantiza que los mismos se celebren con transparencia, obviando el secretismo; tal como lo recoge el citado autor Nelson Delgado Peña, cuando establece: “La publicidad del procedimiento protege a los justiciables con una justicia secreta que escapa de la fiscalización del público y constituye uno de los medios que contribuye a mantener la confianza en los Tribunales de Justicia. Por la transparencia que proporciona a la administración de justicia, ayuda a alcanzar el proceso justo, cuya garantía se encuentra entre los principios de toda sociedad democrática” (Delgado P., 2005, pág. 57).

En la actualidad existe una discordia entre la publicidad y la reserva sumarial del sistema procesal mixto moderno con tendencia inquisitiva, en la cual el secretismo o la llamada reserva del sumario era casi absoluta, y solo la defensa podía revisar el proceso. En el nuevo sistema acusatorio la reserva del sumario desaparece; pues, solamente, existe una sola fase o etapa procesal denominada, el juicio.

n) Juez Natural

Nadie podrá ser juzgado por un tribunal especial instituido con posterioridad a la comisión del hecho punible que se investiga y que esté al margen de la estructura ordinaria del sistema judicial establecido.

Tanto el texto del Anteproyecto de Código Procesal, versión revisada de 1999; como el anteproyecto de Código Procesal Penal establecen que, “Nadie

puede ser procesado ni condenado por jueces o tribunales especiales o de excepción. La potestad de juzgar y aplicar la pena o medida de seguridad corresponde únicamente a jueces y tribunales previamente instituidos de conformidad a la Constitución y la Ley”.

Sobre este principios el citado tratadista Nelson Delgado Peña sostiene que, “Se tendrá en cuenta que debe señalarse con anterioridad a la ocurrencia de los hechos, cuál es el funcionario judicial que debe adelantar la actividad jurisdiccional, prohibiéndose, por tanto, un juez excepcional o improvisado y desconocido. Los tribunales *ad-hoc* para instruir ciertos delitos, vulneran este principio del juez natural y además, algunos derechos y garantías fundamentales”. (Delgado P., 2005, pág. 60).

Además, este principio guarda mucha relación con la separación de los poderes y asegura que los funcionarios encargados de impartir justicia, puedan actuar con absoluta independencia imparcial y especial.

o) Doble Instancia

Las resoluciones judiciales que se refieren a la libertad del imputado, así como las que afectan la práctica de pruebas, estarán sujetas a la revisión de un superior mediante el recurso de apelación, sin que se agrave la situación jurídica del apelante.

El principio de la doble instancia se remonta a la Revolución Francesa, allí se intentó eliminar definitivamente, mientras sus opositores con el temor de que se realizara en tiempos posteriores, la consideraron como unos de los

principios fundamentales y en la actualidad, ha sido elevada a nivel constitucional.

Este principio ha tenido una marcada contradicción, sustentado por los que adversan esta tesis de los principios de inmediación y oralidad, quienes aducen que el Juez de segunda instancia no se mantiene en presencia del acervo probatorio.

Pero, se ha concluido que los principios de oralidad e inmediación no riñen con el de doble instancia, ya que tienen ciertas limitaciones que no empañan la labor del *a-quo*, pero si deja sentado que el Juez de primera instancia debe desarrollar toda su capacidad para fallar conforme a la convicción razonada.

2.3.2. Las partes intervinientes dentro del Proceso Acusatorio

2.3.2.1. Tribunales Competentes

Rocco, define la competencia así: “es aquella parte de la jurisdicción que corresponde en concreto a cada Órgano Jurisdiccional singular, según ciertos criterios a través de los cuales las normas procesales distribuyen la jurisdicción entre los distintos Órganos Ordinarios de ella” (Rocco, 1970, pág. 50).

En esta investigación, la competencia para el conocimiento del Proceso Abreviado, está concedida a los Jueces de Garantías de Circuito, al Magistrado de Garantía del Tribunal Superior, de la Sala Penal y del Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

Las funciones del Magistrado o Juez de Garantía están recogidas en los artículos 678 y 707 del Anteproyecto de Código Procesal Penal, donde se

establece que él decide en torno a la admisión de la querella, tiene control jurisdiccional sobre todo los actos de la fase de iniciación del proceso, sugiere y resuelve la aplicación de métodos alternativos de solución de conflicto, lo concierne al desistimiento de la pretensión punitiva y conoce en torno a la aplicación o no del criterio o regla de oportunidad; habrá de resolver todo cuanto concierne a las incidencias que se presenten, además de la aceptación o no del juicio abreviado y directo. También, resuelve y decide si la causa es elevada a juicio ante el Tribunal Colegiado de Circuito o Tribunal Colegiado Superior de Distrito Judicial. Como Juez o Magistrado de Garantías su misión está destinada a ser un custodio permanente y celoso de la efectiva y real vigencia de las libertades y garantías constitucionales previstas en la Constitución con especial mención de la preservación de la dignidad humana para lo cual habrá de tener como norte la aplicación de una justicia penal cimentada en el concepto de “igualdad de armas” -proceso debido- para las partes en contienda penal.

Es este sujeto procesal, quien va a decidir si acoge o niega la petición de Proceso Abreviado, solicitada por el imputado ante el Fiscal. De acogerla deberá seguir el procedimiento establecido en el artículo 707 num. 9 del Anteproyecto de Código Procesal Penal.

La figura del Juez de Garantía surge en Alemania en los años 70, para garantizar los derechos fundamentales e intervenir en el proceso para desempeñar diversas funciones como: la de velar por los derechos de los imputados y demás partes intervinientes durante el procedimiento.

En el modelo acusatorio adoptado por algunos países latinoamericanos, entre los que están Colombia y Puerto Rico, todas las actuaciones y decisiones que deban resolverse antes de la audiencia de acusación, preparatoria o de juicio oral, se tramitarán en audiencia preliminar ante el Magistrado o Juez de control de garantías.

2.3.2.2. Ministerio Público.

La apertura de la investigación le corresponde exclusivamente, a un ente técnico especializado llamado Ministerio Público, que lo conforman el Procurador General de la Nación, el Procurador de la Administración, los Fiscales y demás funcionarios que la ley establezca. (Artículo 206 del Anteproyecto de Código Procesal Penal)

Es la institución encargada de acopio de los medios probatorios, una vez haya noticia de que se ha cometido un delito; de remitir el negocio ante el Magistrado o Juez de Garantía, cuando el imputado desea que su causa sea decidida al inicio de la investigación, mediante el proceso abreviado. Además, informa a determinada persona, sobre su situación procesal, dentro de una investigación y solicita al Juez de Garantía que dé por cerrada la primera fase de la investigación.

Entre las principales funciones que ejerce el Ministerio Público de acuerdo al Anteproyecto de Código Procesal Penal están:

1. Ejercer la acción penal. (art.208)
2. Practicar todas las diligencias para investigar el delito. (art. 209)
3. Dirigir la actuación de la Policía Técnica Judicial.(art.209)
4. Adoptar medidas para proteger a la víctima y facilitar su participación en el proceso.(art.210)

5. Ejercer acciones que impliquen afectación a derechos fundamentales bajo el control de Juez de Garantías y otras.

2.3.2.3. Querellante

La querella es definida por Jorge A. Claria Olmedo como, “acto solemne que contiene una imputación concreta de un hecho considerado delictuoso, y captado por alguna de las figuras, específicamente, incluidas dentro de esta modalidad de la acción penal, dirigida contra persona determinada en su identidad física.”(Claria O., 1994, pág. 185-186)

Esta puede incursionar dentro del proceso penal e intervenir en la etapa de instrucción para coadyuvar en el ejercicio de la acción penal, realizando las diligencias necesarias para probar la existencia del delito; tanto en los perseguibles de oficio, como los de instancia privada. Además, de solicitarle al Juez de Garantía, en conjunto con el Fiscal, el cierre de la primera fase de la investigación.

Su actuación siempre será representando a la víctima del delito, al representante legal o tutor, al cónyuge, al conviviente en unión de hecho, a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, al heredero testamentario cuando acuse muerte del causante.

2.3.2.4. Defensor

El Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Policiales de Manuel Ossorio, lo define: “Defensor es el que patrocina y defiende en juicio a cualquiera de las partes” (Ossorio, 1994)

El derecho a defensa es indispensable para cumplir el principio fundamental del debido proceso. La defensa técnica es ejercida una vez se adquiere la condición de imputado, y según el derecho positivo vigente, ésta se adquiere cuando se es sindicado como autor o partícipe de un delito o, toda persona contra la cual se formalice una querella.

La Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su artículo 10, "toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia, por un Tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal".

Los tratadistas Alfredo Velez Mariconde y Jorge Claria Olmedo, han concordado en sus teorías, que la defensa se manifiesta, primeramente, en el derecho al proceso como presupuesto de la pena, en la cual el perseguido pueda intervenir con amplitud suficiente para hacer valer sus intereses jurídicos.

La labor del defensor se circunscribe, como en todo proceso, a defender los intereses y derechos del procesado buscando y ejecutando aquellos actos que la ley le permite para defender a su representado.

2.3.2.5. Imputado

Adolfo Motero define al imputado como: "el sujeto pasivo de la acción penal y a su vez, es el sujeto del delito que se le investiga, se le conoce además como imputado o sumariado durante el perito sumario, encausado, enjuiciado o procesado cuando se encuentra el proceso en la etapa de la

causa o plenario y condenado o reo cuando en su contra se ha dictado sentencia condenatoria”. (Montero, 1986, pág. 37).

El imputado se constituye en parte del proceso desde el momento en que es sindicado como autor o partícipe de un delito o toda persona contra la cual se le formule una querella o también, cuando se le haya aplicado alguna medida cautelar personal o medida de seguridad.

A su vez, es el único sujeto procesal legitimado para solicitar la sustanciación de su causa en un proceso abreviado ante el Juez o Magistrado de Garantías.

2.3.2.6. El tercero incidental

Sobre este sujeto procesal vale la pena plasmar lo que al respecto dice el procesalista Alberto Cárdenas González: “Un clásico ejemplo del tercero incidental, lo constituye la persona natural a quien por homonimia o error le embargan y/o secuestran un bien por razón de un proceso penal al cual le resulta completamente ajeno. A partir de ese momento surge para ella un interés económico en el proceso, que, automáticamente, la legitima para tramitar de manera personal, o mediante un abogado el correspondiente incidente procesal de desembargo” (Cárdenas G., 1996, pág. 86)

Es así, que su participación se da en el proceso por medio de un incidente, como su nombre lo indica, cuando sin estar obligado a responder penalmente en un acto criminoso que él no cometió se le ve afectado un derecho patrimonial dentro del proceso.

2.3.3. Estructura del proceso penal acusatorio

La estructura del proceso penal acusatorio está distinguida por dos (2) etapas principales a saber: la etapa preprocesal o de instrucción y la fase procesal o del juicio. En la primera se desarrolla la principal labor consistente en la investigación para la preparación el juzgamiento oral. Es en esta etapa donde se recogen los elementos de prueba que servirían de base para la solicitud de elevación a juicio; también en esa fase el imputado puede solicitar al fiscal, que su causa sea decidida mediante el juicio abreviado.

En la segunda se destacan los troncos secundarios, integrados por dos (2) audiencias, la calificatoria o audiencia preliminar y el juicio oral o audiencia plenaria. Sin embargo, si el imputado ha solicitado que su causa sea decidida en la fase intermedia, el Juez de garantías convierte la audiencia preparatoria, en Juicio oral, siempre que se reúnan los requisitos establecidos por el artículo 446 del Anteproyecto de Código Procesal Penal.

A su vez, cada una de las dos (2) secciones principales se encuentran integradas por una serie de grupos, que son los que van dando formas y cohesión e igualmente son los que permiten vislumbrar los conceptos de validez y eficacia al proceso penal en punto de estructura y garantía. Como lo son: la petición del proceso abreviado que lo hace el imputado ante el Fiscal en la etapa de instrucción.

Para Heliodoro Fierro Medez la investigación “comprende varias razones a saber: la investigación para descubrir la existencia de posibles conductas punibles y la investigación tendiente a satisfacer el escrito de formulación de

imputación o de acusación, según sea el caso. En la primera dirección puede hablarse o decirse que lo que existe es una búsqueda de información preliminar, en la segunda la investigación y búsqueda a partir de una teoría o hipótesis debidamente formulada” (Fierro-M., 2004, pág. 9).

Le corresponde al Ministerio Público ejercer la acción penal, para realizar la indagación e investigación de los hechos que revisten características de delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, querella, petición especial o por cualquier otro medio idóneo.

2.3.4. El Proceso Abreviado en el nuevo sistema procesal acusatorio

2.3.4.1. Generalidades.

El instituto de proceso abreviado se ha incorporado en las diferentes legislaciones, según el doctor José Caferrata Nores, “con la idea de lograr sentencias en un lapso razonable, con fuerte ahorro de energía y recursos jurisdiccionales y sin desmedro de la justicia, tradicionalmente aceptada para los delitos leves, se ha extendido últimamente también para el tratamiento de ilícitos de mayor entidad” (Caferrata N., 1999, pág. 3.).

Según Juliana Paolorossi, “el proceso abreviado se inscribe en lo que se denomina “legislación de emergencia”, con la que se pretende combatir la morosidad judicial descongestionando el número de casos penales a la espera del juicio” (Paolorossi, 2000, pág. 7)

Italia introduce el Proceso Abreviado en su nuevo Código de Procedimiento Penal de 1989, bajo la rúbrica de procedimientos especiales,

(Libro VI) varias disciplinas del género “Proceso Penal Abreviado” los cuales son: El Juicio Abreviado propiamente dicho, cuya causa en juzgamiento se define en, la audiencia preliminar, buscando una solución anticipada del caso y, posibilitando una disminución de pena; la aplicación de la pena a solicitud de parte, que tiene el acuerdo sobre la sanción penal como médula; el juicio directísimo, que contempla supuesto de flagrancia y confesión; el juicio inmediato, que procede cuando la prueba es evidente y el procedimiento por decreto, un procedimiento monitorio, que condena sin debate con impugnación tardía.

En España, por vía de reforma de su Ley de enjuiciamiento criminal, se regula el proceso abreviadísimo, cuyos fines son: 1.- la simplificación procedimental, suprimiendo procesos ordinarios, 2.- la eliminación de trámites superfluos del proceso tipo, o de los procesos que se mantienen, en la fase de instrucción, 3.- la facilitación de soluciones autocompasivas que eliminen el proceso, 4.- le reconceptualizan el principio de oportunidad, 5.- el cambio del órgano competente para instruir las causas criminales, en perjuicio del Juez y a favor del Ministerio Fiscal. 6.- La potenciación de la actuación de la policía judicial, mucho más independiente del Ministerio Fiscal que del Juez. Por otro lado, dentro del sistema español, se ha insertado el juicio rápido, cuyo contenido está dado, ante todo, por la flagrancia del delito o evidencia de los hechos.

Por su parte, Portugal en el nuevo Código Procesal Penal Portugués, bajo la signatura de procesos especiales (libro VIII), se encuentran regulados el

“proceso sumaria” y el proceso sumarísimo. El primero, alcanza a supuesto de flagrancia en delitos que no superen los tres (3) años de prisión; el segundo, abarca delitos leves, como penas de prisión no superiores a seis (6) meses, de multas o de inhabilitaciones para conducir automotores.

En cualquiera de las dos (2) modalidades están presentes ideas de formalidad, celeridad y consenso, que deben tener absoluta prioridad en el ámbito de la pequeña criminalidad, donde es menor el grado de daño social y la alarma colectiva provocada por el delito. A su vez, en el caso del proceso sumarísimo, la intención de reducir al mínimo la estigmatización social del delincuente, de potenciar el consenso y, como consecuencia, de ofrecer hipótesis que fortalezcan principios político-criminal de resocialización de delincuentes.

En América, Brasil con su constitución de 1988, previó procedimientos sumarísimos y orales para las infracciones penales dominadas de menores potencias ofensivas.

Recientes códigos, han incorporado a su ordenamiento legal el Procedimiento Abreviado, por ejemplo, los de Guatemala (1996) y El Salvador (1997).

Corresponde mencionar, así mismo, en el terreno del derecho proyectado en el área, el Anteproyecto de Código Procesal Penal, para Paraguay, al igual que Bolivia.

Por otro lado, este tipo de proceso expedito que tratan los anglosajones y recogen las normas rectoras del debido proceso consagradas en el Pacto de

San José de Costa Rica y del proyecto de Reglas Mínimas de las Naciones Unidas, en donde se pacta entre las naciones suscritas, lograr la celeridad de los procesos penales.

También en el sistema Norteamericano, donde las partes gozan de amplia disposición del objeto del proceso, se admite la disposición sobre el proceso mismo. Además, que el acusado renuncie a la vista preliminar, cuyo objeto es la determinación de la causa probable para creer que se ha cometido el delito. Sin embargo, tal acto de disposición es diverso en la confesión, por un lado, y cuyo lugar de producción, en la fase de pre-trial, le confiere naturaleza no procesal. Por otro lado, la admisión de culpabilidad, que presupone ya el indicio por el gran jurado o la acusación por el Fiscal, produciéndose un específico procedimiento para alegación pre-acordada.

A la legislación panameña se le incorporó el Proceso Abreviado, a partir de la sanción de la ley 1 de 3 de enero de 1995, ya que sólo era aplicable en los procesos civiles y laborales, la cual no tenía otra razón de ser, que la de darle cumplimiento a lo que se encuentra establecido en la Carta Magna, en su artículo 32 sobre el debido proceso y en el 212 sobre el proceso expedito que trata de la “simplificación de trámites, economía procesal y ausencia de formalismos” y en el artículo uno (1) del Código Judicial que le da el matiz legal cuando expresa: “La administración de justicia es pública, gratuita, expedita e ininterrumpida”.

La exposición de motivos de la ley 1 de 1995, tiene como propósito mejorar las instituciones procesales y lograr la agilización de las causas

penales que conocen en primera instancia los Juzgados Municipales y de Circuito, tribunales estos que concentran el 80% de los negocios penales en el país.

Con esa misma ley se introduce el Proceso Directo, que es la figura que se asemeja más al Proceso Abreviado, aunque los requisitos para su procedencia son diferentes: en el Proceso Abreviado, la investigación debe estar completa y que el resultado de la prueba resulte evidente. Mientras que, en el Proceso Directo el imputado tiene que ser detenido en flagrante delito y existir confesión de su parte.

Otra diferencia es que en el Proceso Abreviado la defensa puede alegar inocencia o alguna causal de exculpación; mientras que, en el proceso directo se está en la fase de condena y la defensa solamente puede alegar la aplicación de la pena.

A pesar que en el Código Judicial vigente no se establece ningún beneficio para el imputado que se somete a los rigores del Proceso Directo, tal como ocurre con el Proceso Abreviado, el Anteproyecto de Código Procesal Penal viene a igualar el beneficio para los imputados que se sometan a los rigores del proceso Abreviado y Directo, existiendo siempre la diferencia en cuanto a los requisitos.

El anteproyecto institucional del Órgano Judicial no regula el Proceso Abreviado en todo su articulado, pues solamente se refiere al Proceso Directo, señalando los requisitos anteriormente descritos.

A pesar de todos estos pactos y leyes que se han establecido para la agilización de los procesos penales expeditos, sin violar las garantías del debido proceso; se continúa con las críticas sobre el sistema penal vigente, relacionadas con la mora judicial, las amplias facultades inquisitivas del Ministerio Público y la del Juez investigador y juzgador.

Con la experiencia ha quedado demostrado que la aplicación de esta nueva institución procesal se ha logrado una agilización de las controversias penales, como lo sostiene la doctora Aura Emérita Guerra de Villalaz y Rosaura Chichilla Calderón, al señala que el Proceso Abreviado ha sido creado para beneficio del imputado, a cambio de agilizar su causa penal; toda vez, que el defensor con anuencia del imputado solicita al Juez de la causa, una vez reunidos los requisitos, que ésta se surta mediante el trámite abreviado, forzando al juzgador a realizar una calificación sin necesidad de alegatos, procediéndose, inmediatamente, a sustanciar la audiencia de fondo.

Se observa, en este proceso que las fases intermedia y plenaria, quedan reducidas a un solo acto, haciendo de esta forma que los términos se acorten y la sentencia sea dictada en el acto de audiencia.

Con la nueva legislación se logra dar respuesta a las críticas de las cuales es objeto, el Órgano Judicial y el Ministerio Público, los cuales tienen la facultad jurisdiccional de darle celeridad a los procesos sin mayores complicaciones, y sin violar las garantías de cada individuo que se acoge a este juicio y que las circunstancias requeridas del proceso lo permitan.

A continuación, los requisitos relacionados con el proceso o juicio abreviado en el nuevo sistema procesal acusatorio y también, algunos principios básicos que guardan, relación con este proceso:

Oportunidad

Beneficios

Requisitos sustanciales

Decisión

Requisitos formales

Recursos

Controles del Juez

2.3.4.2. Oportunidad.

Definitivamente que, la oportunidad le asiste al propio imputado de solicitar la substanciación del proceso y decisión dentro de la audiencia preliminar siempre y cuando “la investigación esté completa y la prueba resulte evidente”. Así, lo establece el Código Judicial vigente (Artículo 2526) y el anteproyecto de Código Procesal Penal. (Artículo 446).

En principio, cuando se introdujo la citada figura al sistema procesal panameño, era necesario la anuencia del Ministerio Público o de su concepto favorable, como lo establecía la propia ley, la cual lo ubicaba como única parte legitimada para decidir si se procedía a la celebración del juicio abreviado, esto sujetaba al tribunal de la causa, a tomar la decisión de negar la petición. De esa forma, se vulneraba el principio de igualdad de las partes, el cual está claramente, reconocido, por la Constitución Nacional, en sus artículos 19 y 20.

Esta evidente violación a los principios constitucionales motivó al Licenciado José Ramiro Fonseca, elevar una demanda de inconstitucionalidad

ante la Honorable Corte Suprema de Justicia, quien mediante fallo N° 715 de 21 de marzo de 1997, sostuvo lo siguiente:

“...a juicio del Tribunal Constitucional es la exigencia de la conformidad del agente de instrucción lo que coloca el proceso en una situación de desequilibrio, al conferirle a dicho funcionario la potestad de hacer negatoria el ejercicio de un derecho por el imputado, sin que siquiera se manifieste la intervención o dirimente o decisoria de la autoridad jurisdiccional.

No parece entonces razonable que se sujete la eficacia o los resultados de la iniciativa procesal a una de las partes -en este caso la solicitud de juicio abreviado- a la voluntad de la otra. Conforme al ordenamiento jurídico fundamental, lo que procede es que, en el evento de que exista contradicción entre las partes, le corresponda al juzgador la decisión final, como lo autoriza el artículo 2528-B del Código Judicial. Lo antes indicado lleva al Pleno a concluir que el término “favorable” que aparece en el texto del artículo 2528-A del Código Judicial, así como el vocablo “conjuntamente”, inserto en el último inciso de este precepto infrinjan el imperativo de igualdad que tutela el artículo 32 de la Constitución, consagrado del principio del debido proceso y de la ley, por lo que procede la declaratoria de ilegitimidad constitucional y su consecuencia desaparición del ordenamiento vigente...” (Fallo de 21 de marzo de 1997, Gaceta Oficial N° 23,274 de 25 de abril de 1997)

De esta manera, la Honorable Corte Suprema de Justicia consideró sujetar la iniciativa procesal de una de las partes para controlar la petición de Proceso Abreviado, respecto de la otra, y que sea el director del proceso (el Juez) quien decidirá si se encuentran reunidos los presupuestos legales para materializar la petición formulada por el imputado o en caso contrario, continuar con los trámites de la audiencia preliminar.

Con esa decisión la Corte Suprema de Justicia buscó dejar sin acción absoluta a una de las partes y controlar el Proceso Abreviado, por considerar que se violaba el debido proceso, y dejar bien sentada la igualdad de las

partes; pues así, el imputado puede solicitarlo, el Ministerio Público es puesto en conocimiento y, finalmente, es el Juzgador el que decide, previa consideración de los presupuestos legales, que para ello, establece la ley.

Esta oportunidad podía ser materializada por el imputado en dos momentos, según el artículo 2526 Código Judicial vigente:

1. Mediante un escrito de solicitud presentado ante el Tribunal de la causa, cinco (5) días antes de la fecha para la celebración de la audiencia.
2. Antes del inicio de los alegatos durante la audiencia preliminar.

El Anteproyecto de Código Procesal Penal consagra en el artículo 446, que la petición de acogerse al Proceso Abreviado puede hacerla, verbalmente, el imputado ante el Fiscal, para que sea remitida al Magistrado o Juez de Garantías quien va a decidir sobre la viabilidad de la misma en un proceso oral.

La aceptación del imputado de someterse a este tipo de procedimiento no debe ser interpretada como sinónimo de responsabilidad penal por parte del inculpado, pues una vez sea llamado a juicio nada impide declararse inocente de los cargos formulados en su contra y su defensor puede, incluso, aducir todas las pruebas que estime necesarias para acreditar la inocencia de su defendido.

Otras legislaciones, como la costarricense, exigen que para someterse a los rigores del Proceso Abreviado el imputado debe admitir el hecho, lo que ha sido criticado por algunos tratadistas quienes consideran que es “entrar a un pleito de pistoleros, manos arribas. En este caso, ya no se trata de una fase previa del procedimiento, sino que por el contrario, se trata del inicio de la fase

condenatoria, pues qué sentido puede tener la solicitud de un Proceso Abreviado, cuando el hecho es atípico o media una causa de justificación o exculpación” (Cinchilla C., 1997, pág. 97)

Tal como ocurre en el proceso directo, donde uno de los requisitos para su procedencia es que el imputado confiese su participación en la comisión del hecho delictivo. Así lo consagra el anteproyecto de Código Procesal Penal en artículo 448 y Anteproyecto Institucional del Órgano Judicial en el artículo 468.

Esa creencia reinó en los primeros años de vigencia de la mencionada figura en nuestro país, pues el Ministerio Público, persistía en señalar que, para que un proceso fuese abreviado la persona se debía declarar culpable, cuando la norma requiere que los elementos de juicio que están en el cuaderno penal, sean suficientes para que se dicte una sentencia que pueda ser condenatoria o absolutoria. De tal manera que, no está supeditada la posibilidad de hacer que en un proceso abreviado la persona se declare culpable, error que muchos funcionarios persisten en mantener; pues consideran, que el imputado al solicitar un proceso abreviado, se está declarando culpable, criterio que constituyó una limitante en la mayoría de los procesos antes que se hiciera la declaratoria de inconstitucionalidad del concepto favorable de ellos.

Todo ocurría, cuando se le preguntaba o se cuestionaba al imputado sobre sus cargos y este contestaba que era inocente, inmediatamente, el representante del Ministerio Público no daba su anuencia para que el proceso pudiera constituirse en abreviado, coartándole la posibilidad al procesado de obtener los beneficios de una rebaja de pena y una decisión más pronta y

expedita de su causa, situación que ha sido superada. En el nuevo sistema Procesal de Garantías se consagra, que la solicitud de proceso abreviado no es sinónimo de culpabilidad.

Se piensa que la intención del legislador al recoger los principios de favorabilidad y oportunidad en el artículo 2526 del Código Judicial garantiza dos (2) situaciones: 1.) la de brindarle mayor oportunidad al defensor y al imputado de acogerse al Proceso Abreviado, no solamente, antes de la celebración de la audiencia preliminar, sino en el mismo acto oral de calificación del sumario, de forma simple y sin tanta ritualidad, cuando el defensor con anuencia de su representado, solicita al Juez de la causa que esta se surta mediante un Proceso Abreviado. 2.) y por otro lado, se amplía el derecho de defensa, al permitirle al defensor solicitar al Juez, en el mismo acto de audiencia preliminar, que su causa sea decidida mediante el procedimiento abreviado, lo que implica que se dé la calificación de la causa sin necesidad de alegatos, y una vez el imputado sea llamado a juicio, se procede a sustanciar inmediatamente la audiencia de fondo.

2.3.4.3. Requisitos sustanciales

Los requisitos sustanciales ineludibles para la realización del Proceso Abreviado, son dos (2) tal como lo señala el Código Judicial vigente (art. 2526) y el anteproyecto de Código Procesal Penal (art. 446).

- **Que la investigación esté completa:** Es una exigencia que se hace al Ministerio Público y al querellante, de probar obligatoriamente, en la fase inicial de la investigación, las diligencias que tiendan a determinar:

1. Si el hecho punible implica una violación a la ley penal.
2. Quiénes son los autores o participantes.
3. Los motivos que decidieron o influyeron en ellos para la infracción de la ley penal.
4. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se cometió el delito.
5. Las condiciones personales del imputado al momento del hecho.
6. Las condiciones de vida individual, familiar y social del imputado.
7. La naturaleza del hecho y sus consecuencias de relevancia jurídico-penal.

Pues, el Fiscal o la parte querellante deben buscar si existen fundamentos legales para presentar la acusación, con la oportunidad de la defensa del acusado y observando los principios o reglas como la legalidad, juzgamiento del natural, defensa técnica, contradicción bilateral, aplicación de las normas constitucionales y los convenios sobre Derechos Humanos aprobados por Panamá, inmediación, oralidad, publicidad, imparcialidad del Juez, respecto de las garantías de los derechos del imputado y la víctima, y el cumplimiento de la garantía del debido proceso.

Además, de las diligencias señaladas en el párrafo anterior, se ordena realizar otras para cada caso específico, con el fin de lograr que la investigación esté verdaderamente completa.

Para los delitos de lesiones personales (art. 2065 C. J. y art. 491 del anteproyecto), se debe incorporar al proceso los siguientes puntos:

1. La región, lugar o parte del cuerpo en que se han inferido las lesiones.
2. La extensión, profundidad, naturaleza y estado que tuvieron.
3. Las armas, sustancias o clase de instrumentos, con que han sido causadas.
4. El tiempo preciso o aproximado, en que se ejecutaron.

5. El peligro más o menos grave o leve, más o menos próximo o remoto que causen para la vida del lesionado.
6. El término cierto o probable de su curación o la imposibilidad de alcanzarla.
7. Los órganos afectados y la incapacidad que ocasionen al paciente para su trabajo habitual.
8. El estado general de salud de la persona, antes y después de las lesiones o heridas.
9. Todas las demás circunstancias que sirvan para caracterizar y medir sus consecuencias.

En los delitos contra el patrimonio (art. 2069 C. J. y art. 494 del anteproyecto), se debe hacer constar:

1. El escalamiento, fractura, fuerza, violencia o amenazas que haya habido.
2. Las señales, huellas o rastros que hubiera dejado la comisión del hecho.
3. La ocultación o encubrimiento de los efectos sustraídos.
4. El lugar donde se hayan transportado y las personas que los hubieren conducido.
5. Los medios o instrumentos que se han empleado para perpetrar el delito.
6. El tiempo en que se ejecutó.
7. La preexistencia, propiedad o tenencia y posesión lícita, de las cosas sustraídas, para lo cual, y a falta de otras clases de pruebas se tendrán como prueba la deposición jurada del interesado, de su consorte, hijos, hermanos o quienes le presten servicios personales.

En los delitos de incendiarismo (art. 2080 C. J. y art. 501 del anteproyecto), se debe hacer llegar al proceso:

1. El lugar, tiempo y modo de ejecución.
2. La especie de materia incendiaria o explosiva que se empleó en el hecho.
3. Bienes afectados, extensión y monto del daño causado.
4. Las circunstancias de mayor o menor peligro para personas o cosas más o menos cercanas, si el fuego o la explosión se hubiere propagado.

5. Los medios empleados para causar los estragos y los puestos en prácticas para apagar o detener el incendio, o bien para impedir o neutralizar la explosión. Para avaluar el monto de los estragos y del daño, el Fiscal nombrará peritos, cuya evaluación se hará constar, específicamente, en el proceso.

En los casos de delito contra el pudor y la libertad sexual (art. 2086 C. J.

y art. 505 del anteproyecto), se hará constar:

1. Edad de la víctima.
2. Tipo de himen; si hubo o no desfloración y el tiempo aproximado de la misma.
3. Si hay muestras de violencia física externas o internas.
4. Si hay síntomas de embarazo y el tiempo aproximado de la gestación.
5. Si hay evidencias de coitos recientes o múltiples.
6. En el caso en que proceda, indicar el estado del esfínter anal, si existe o no deformación de ano, si hay erosiones del orificio y desgarradura de la mucosa rectal.

Y en los delitos contra el ambiente (art. 2086-A C. J. y art. 510 del anteproyecto), el Fiscal debe practicar:

1. La suspensión o modificación de las construcciones, obras o actividades que hayan dado lugar al daño ambiental investigado.
2. La reinserción inmediata de los elementos naturales, ejemplares o especies de la vida silvestre a su hábitat del que fueron sustraídos.

Todas estas normas procesales deben ser analizadas por el Juez, a objeto de determinar si es viable acceder a la solicitud del proceso abreviado.

- **Que la prueba resulte evidente:** Este segundo requisito sustancial determina la vinculación directa del imputado con el hecho, por lo tanto,

es exigible que los elementos recabados en la encuesta sumarial o de instrucción, tanto objetivos como subjetivos, vinculen al imputado con el hecho ilícito criminoso investigado; de tal manera, que dejan convencido al Juez para que la causa se decida como se ha solicitado. Aunque el imputado haya solicitado la sustanciación abreviada, los elementos para la vinculación deben ser claros, pues el Juez decidirá conforme a lo que existe en el expediente, si se le concede la solicitud.

Así pues, dentro de una investigación hay que determinar qué elementos son esenciales para acreditar un hecho punible y cómo acreditar la parte subjetiva, o sea, la vinculación del imputado al delito; estos son los requisitos sustanciales que exige la norma para la celebración del Proceso Abreviado. En la etapa de la calificación, solamente, se van a verificar esas dos (2) facetas para que el Juez acoja o deniegue la solicitud y al aceptarla, lo conduce a determinar la responsabilidad y culpabilidad del procesado y debe decidirlo mediante sentencia motivada.

Luego de una investigación exhaustiva y acreditada en la vinculación del imputado al delito, mediante pruebas evidentes y que no dan margen a la duda, implica que el juzgador va a llamar a juicio en la calificación y va a sentenciar con los elementos que allí existen. Cuando haya pasado esa etapa de valoración de la tipicidad y la antijuricidad, se va a buscar la responsabilidad y, finalmente, es allí donde el Juez, va a ser juicio de valor, si hay eximente de responsabilidad o causas eximentes de culpa que es otra, todo ello, independiente, de la persona que está vinculada. El juicio de valor subsiguiente

es en otros niveles, en el cual, se va a determinar si es responsable; y posterior a ello, su consecuente penalidad.

Los artículos que se han transcrito, tanto del Código Judicial y del Anteproyecto de Código Procesal Penal, demuestran cómo la existencia del hecho punible y la vinculación del agente activo a la comisión ilícita; pueden abrir causa criminal en contra de un procesado.

Si el imputado solicita el trámite de Proceso Abreviado, se presume que va a ser llamado a juicio; pero, han sido muchas las experiencias, en que los defensores solicitan juicio abreviado y el proceso se califica con un sobreseimiento, por circunstancias de carácter procesal exigidas por la ley, como por ejemplo, la querella extemporánea, falta de legitimidad del querellante, etc. Existen casos en que la parte subjetiva y objetiva está completa, y las pruebas recabadas son claras; pero, el proceso está viciado de otros elementos de forma (no se lee el art. 25 de C. N.), para proceder con una condena, pero en ese acto se concluye con el proceso y se evitan las dilaciones.

2.3.4.4. Requisitos formales.

Los requisitos formales han sido comentados anteriormente, en el cual el Proceso Abreviado lo solicita el imputado de forma verbal al Fiscal que lleva la investigación para que este, a su vez, lo remita al Magistrado o Juez de Garantía quien decidirá la procedencia del mismo mediante un proceso oral.

De los dos (2) momentos procesales para la petición del Proceso Abreviado que consagra el actual Código Judicial, se redujo a uno (1) en el

Anteproyecto de Código Procesal Penal. El Código Judicial en su artículo 2526 establece que la solicitud de Proceso Abreviado puede hacerla el imputado por escrito, cinco (5) días antes de celebrar la audiencia preliminar o durante la misma audiencia preliminar, pero antes del inicio de los alegatos. Con el Anteproyecto de Código Procesal Penal, solamente se establece un (1) momento procesal para la petición de trámites del Proceso Abreviado y es, verbalmente, ante el Fiscal que lleva la investigación, coartando los principios de oportunidad y favorabilidad que se habían consagrado con el artículo 2526 del Código Judicial.

Una de las críticas surgidas de la interpretación del artículo 2201 del Código Judicial, es como si existiesen dos (2) alegatos, lo que no es así, ya que al inicio de la audiencia, el Juez le da la oportunidad a las partes, primero al Ministerio Público para que exponga los resultados de la instrucción sumarial y los medios de pruebas que justifique la emisión de su concepto en la Vista Fiscal; y, al defensor, para que sustente su escrito de oposición si ha sido presentado. Posteriormente, el Tribunal procede a estudiar la solicitud y a la vez, comprobar si se reúnen los requisitos para darle la vía abreviada al proceso y, en el acto acogerá lo pedido, o de lo contrario lo denegará, continuando con la realización de la audiencia preliminar.

Así pues, los requisitos formales simples, en este proceso, son de poca ritualidad y formalismos, y permiten que se haga, verbalmente, ante el Fiscal, en este episodio desaparece la parte escrita que se hacía antes de la audiencia. Ahora se reconoce la posibilidad de que se haga verbalmente,

demostrando que existe poco formalismo para que se efectúe este proceso, dando espacio para que la petición sea sencilla y que el Tribunal no tenga que perder el tiempo en recibir escritos, correr traslados y emitir sus decisiones.

2.3.4.5. Controles del Juez

El Magistrado o Juez dentro del nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio de Corte Garantista, en lo que respecta al Proceso Abreviado tiene controles tanto sustanciales como formales. Es él quien va a celebrar el juicio de valor sobre las pruebas que constan en el sumario.

- 1. Controles sustanciales:** Determinar si la investigación está completa, y si la prueba es evidente, para acoger la solicitud efectuada por el imputado.
- 2. Controles formales:** Tiene que controlar los presupuestos de la relación jurídico-procesal: competencia, debido proceso, inmediación y derecho a defensa.

El control del Juez en el Proceso Abreviado queda limitado según la propia ley, solamente, a decidir el negocio, con base en el sistema acusatorio, tomando en consideración la solicitud del Juicio Abreviado, que la instigación esté completa y estar consciente o mejor dicho convencido que las pruebas son contundentes para la vinculación del procesado, por supuesto, sin dejar de controlar el principio constitucional del debido proceso.

2.3.4.6. Beneficios.

a).- Para el imputado.

Para el imputado, el beneficio es evidente, si la sentencia es absolutoria su causa se decide en un término razonable; y, cuando es declarado culpable, se beneficia con una rebaja de pena de un tercio (1/3).

Al respecto, Rosaura Chinchilla Calderón señala “evidentemente las normas del proceso abreviado se crearon en beneficio del imputado, es un estímulo para él, quien sabiéndose responsable de los hechos que se le acusan, los acepta y a cambio de su contribución a la celeridad del sistema producida con dicha aceptación (que muestra el primer paso de arrepentimiento y que el fin resocializador o preventivo especial que apareja la pena se cumplirá en el caso concreto) se le disminuye la sanción prevista por el Ordenamiento Jurídico”(Chinchilla C., 1997,pág. 75).

El Anteproyecto de Código Procesal Penal en su artículo 447 incorpora de forma obligatoria e imperativa la disminución de la pena, cuando en el actual Código Judicial (art. 2529 C.J.) este beneficio es tratado de forma discrecional por el Juez de la causa. Además, viene a igualar el beneficio de la disminución de la pena cuando el imputado se acoja al proceso abreviado y se impongan penas pecuniarias, copulativas o disyuntivas (prisión o multa, prisión y multa), ya que la redacción del artículo 2529 del Código Judicial, solamente, permite la disminución de la pena cuando es de prisión. La práctica tribunalicia es que el Juzgador opta por escoger la multa aplicándose, solamente, las atenuantes que establece el artículo 66 de Código Penal; pues, la norma (art. 2529 C.J.) es

clara y establece, “En los casos que se sigan mediante el Proceso Abreviado, si el Tribunal impusiere pena de prisión, la misma podrá ser disminuida entre una sexta y una tercera parte, luego de considerar todas las circunstancias del hecho punible”.

Sobre este tópico la Corte Suprema de Justicia, mediante fallo de 28 de julio de 1998, consagró lo siguiente:

“La Corte reitera, tal como lo sostiene la Procuraduría que el artículo 2528-D del Código Judicial “es una norma jurídica que faculta al Juez de la causa a disminuir discrecionalmente la pena de prisión ante una sexta parte y una tercera parte, cuando el imputado se acoja a los trámites del proceso abreviado, es decir, que el Juzgador no está obligado sino facultado para reconocer la rebaja de pena de la referencia y de lo anterior se sigue que la norma jurídica citada no ha sido infringida en el concepto anotado (lo subrayado es de la Corte)”

También es importante hacer referencia, cuando se presenta la situación de pluralidad de imputados, donde pueden darse dos variantes:

A) Todos solicitan el Proceso Abreviado, en este caso procedería todo lo antes explicado, es decir, se acoge el Proceso Abreviado si existen los requisitos establecidos para ello, o de lo contrario, se continúa con la audiencia preliminar.

B) La otra variante es que uno solicita el Proceso Abreviado y los otros no.

Pues, las normas procesales vigentes, guardan silencio sobre esta situación, por cuanto, ha existido tanta polémica respecto de la indivisibilidad del proceso. Para el Licenciado Julián García Trejo cuando se da esta situación “...para los últimos se celebra la Audiencia Preliminar común, vamos a llamarla

así, y para los primeros se procede también a celebrar la Audiencia Preliminar, pero con la sustanciación y decisión del Proceso Abreviado dentro de la misma. No son dos (2) Audiencias Preliminares, es una sola, pero con dos (2) variantes. Lo único que aquí el Juez sí podría ordenar sobreseimiento y ampliaciones en cuanto a la situación procesal de quienes no pidieron Proceso Abreviado. Razón por la cual, tendría que esperar que el proceso esté en estado de fallar para todos por igual antes de dictar sentencia” (Escuela Judicial, pág.61).

En la práctica tribunalicia no se ha permitido que unos se acojan al Proceso Abreviado y los otros no, ya que según los juristas violenta la unidad del proceso que conlleva implícito una serie de actos concatenados entre sí y que se suceden progresivamente unos a otros de manera ordenada, siguiendo el debido procedimiento que consiste en trámites y formas preordenadas por la ley y necesarias para el normal desenvolvimiento del debido proceso.

Sobre este tema se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, mediante fallo de 5 de junio de 2002, en el cual sostiene lo siguiente:

“...por otro lado, esta Sala es del criterio que en un proceso donde hay una pluralidad de imputados y sólo uno de ellos se acoge al Proceso Abreviado, éste no debe ser afectado por la renuencia del resto de los sumariados a comparecer al proceso o a negarse que la causa se agilice de acuerdo a este trámite. Esa situación no debe ser imputable al sumariado compareciente quien, en virtud de ello, puede ser beneficiado con una disminución de la pena que le corresponda de conformidad con el artículo 2529 del Código Judicial...”.

Las nuevas corrientes que consagra el Anteproyecto de Código Procesal Penal en el artículo 449, se orientan a que si existe pluralidad de imputados y unos solicitan el Juicio Abreviado y otros no, la solicitud no puede ser acogida por el principio de la unidad del acto; pero, se tiene en cuenta el beneficio de rebaja de pena para el que se acogió al Proceso Abreviado, que es un beneficio, como ya hemos dicho, de tipo procesal.

b).- Para el Tribunal de la causa.

El Tribunal se ve beneficiado porque en un solo acto finaliza el proceso, dando la oportunidad a que se realice otras labores como: decidir sobre medidas cautelares, fianzas, etc., y no perder el tiempo en realizar una nueva audiencia. Otra ventaja importante es que, el procedimiento establecido en el artículo 707 Num. 9 del Anteproyecto de Código Procesal Penal es más corto que el consagrado en el artículo 588, donde ya el Juez de Garantía no tiene que explicarle a las partes sobre los medios alternativos de solución de conflicto; porque tiene elementos claros incriminatorios contra el imputado, todo ello, permite que el Juzgador simplifique los trámites.

En términos generales, con el Proceso Abreviado se permite dictar sentencia en el acto de audiencia una vez concluido los alegatos, y la copia de la misma es ofrecida en un disco compacto, evitando una espera para el procesado y su defensor.

c).- Decisión.

La doctora Aura Emérta Guerra de Villalaz en su conferencia dictada en el Auditorio de Órgano Procesal, "Consecuencia procesal de la Ley 1ª de 3 de

enero de 1995 dice: "dada la facilidad esencial del Proceso Abreviado de agilizar los tratamientos a que son sometidos los procesos penales, la decisión del Juez se rige por las reglas previstas en el capítulo I, Título VI del Libro III, pero en términos fijados reducidos en un 50%" (Registro Judicial, mayo 1995, pág. i).

Así pues, una vez terminada la audiencia, el Juez o Magistrado de Garantía procederá a dictar sentencia en el acto y la copia de la misma será entregada a las partes en un disco compacto. (art. 707 Num. 9 del Anteproyecto).

El actual Código Judicial establece dos (2) variantes para dictar sentencia dentro de un Proceso Abreviado: en el acto de audiencia una vez terminada la fase de alegatos; y, la otra que los términos señalados en el Título IV, Capítulo I, Libro III, son reducidos a la mitad, es decir, la norma tasa en términos de 10 días y en caso de complejidad y extensión, el término no excederá de 30 días, en estas circunstancias el Tribunal tiene para resolver entre 5 y 15 días.

2.2.3.7.- Recursos.

Los recursos son los medios de impugnación procesal, contra las resoluciones judiciales, y los que guardan relación con el Proceso Abreviado son los establecidos en el artículo 339 del Anteproyecto de Código Procesal Penal, que son cuatros (4) a saber:

a). Apelación.

La apelación tiene por objeto el examen de la decisión dictada en primera instancia y permite al Superior revocarla, reformarla o confirmarla. (ver Artículo 341 del Anteproyecto de Código Procesal Penal). Este derecho se extiende a todos aquellos a quienes aproveche o perjudique la sentencia.

La sentencia dictada dentro del Proceso Abreviado puede ser apelada por cualquiera de las partes, para que el Superior la revoque, reforme o confirme, según sea el caso; ya que la decisión del imputado de acogerse a este tipo de procedimiento no se puede interpretar como sinónimo de culpabilidad.

b). Casación.

Para el doctor Carlos Cuestas el Recurso de Casación es definido como: “recurso legal de naturaleza extraordinaria, u ordinaria según algunos ordenamientos procesales, contra todas o algunas sentencias o autos en materia penal (las de segunda instancia o los autos que ponen término al proceso) a fin de que la Corte de Casación, como Suprema Instancia Jurisdiccional las anule (o case) por infringir en el fondo o en la forma la ley penal. La anulación puede ser con reenvío a un tribunal inferior o convirtiéndose la propia Corte de Casación en tribunal de instancia” (Cuesta S., 2000, pág.14).

De esa misma forma se expresa Manuel Ossorio cuando sostiene que, “es el que se interpone ante el Tribunal Supremo contra fallos definitivos o laudos en los cuales se suponen infringidas leyes o doctrina legal, o

quebrantada alguna garantía esencial del procedimiento” (Ossorio, 1994, pág.835).

La sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial, dentro de un proceso donde el imputado se acogió al Juicio Abreviado puede ser objeto del Recurso de Casación, cuando proceda por delitos que tenga pena señalada superior a cuatro (4) años de prisión. Así lo señala el artículo 352 del Anteproyecto de Código Procesal Penal.

c). De hecho.

Para Manuel Ossorio es “el que cabe interponer ante el Tribunal Superior, aunque el inferior lo niegue” (Ossorio, 1994, pág. 837)

Dentro de la sentencia dictada en un Proceso Abreviado, el Juez de Garantía puede negar la apelación o el Tribunal Superior puede negar la consecución del Recurso de Casación, entonces la parte agraviada tiene el derecho de ir al Superior competente e interponer el Recurso de Hecho en contra de esa negativa, tal como lo establece el artículo 347 del Anteproyecto de Código Procesal Penal.

d). Revisión.

El doctor Carlos H. Cuestas G. sostiene que, “a diferencia de los recursos de apelación y de casación, el de revisión es un medio extraordinario de impugnación caracterizado por su idoneidad de modificar y revocar los efectos de cosa juzgada de una sentencia condenatoria. En efecto, el recurso puede ejercerse en cualquier tiempo contra toda sentencia definitiva de condena, siempre que concurren las causales, taxativamente previstas en la

ley, y no obstante, las eventuales diferencias entre los distintos ordenamientos, recaen por lo general en supuestos de contradicción de sentencias penales por un mismo delito, el descubrimiento de nuevos hechos que pudieren justificar la absolución, la declaratoria de falsedad de los actos, juicios u otros hechos de los que depende la condena o si esta se obtuvo en virtud de cohecho o violencia, por la eliminación del delito por una ley posterior, etc.” (Cuestas G., 2000, pág.66).

En ese sentido se expresa Manuel Ossorio cuando señala que el recurso de revisión es aquel que, “se da contra sentencias definitivas y firmes, aunque hayan sido pronunciadas por la Corte Suprema de Justicia. Son los casos previamente establecidos por la ley” (Ossorio, 1994, pág.875).

De la redacción del artículo 374 del Anteproyecto de Código Procesal Penal, se desprende que el recurso de revisión cabe contra sentencias ejecutorias, cualquiera que fuese el Tribunal que las haya dictado. Es decir, que una sentencia dictada dentro de un proceso, donde el imputado se acogió al Proceso Abreviado, puede ser revisada.

CAPÍTULO TERCERO
MARCO METODOLÓGICO.

3.1. Paradigma o tipo de investigación:

El trabajo corresponde a una investigación en Ciencias Sociales, de carácter cualitativo, con enfoque holístico-inductivo, que consiste en trabajar con interrogantes de investigación, donde se hace reflexionar al investigador y lo induce a extraer conclusiones sobre un verdadero análisis.

Es una investigación de tipo descriptiva-analítica, ya que, procura la descripción y análisis de una situación o fenómeno que se suscita en determinado lugar, tiempo y espacio.

En síntesis, la investigación descriptiva inicia con hechos reales que son analizados a partir de los factores o datos que se generan del mismo acontecimiento investigado. El método descriptivo de investigación permite hacer una interpretación de la realidad con carácter objetivo e imparcial, y como se ha mencionado, toma los datos del fenómeno a estudiar lo cual permite no solo conocer la realidad e identificarla, sino que también, plantea metas y objetivos realizables en un futuro.

Lo trascendental de la investigación descriptiva es la capacidad para seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio y la descripción detallada de los aportes, categorías o clases de dicho objeto.

El estudio de tipo descriptivo-analítico, permitirá recopilar la mayor información, mediante revisión de escritos de diferentes autores como: El Anteproyecto del Código de Procedimiento Penal, literatura sobre el tema, revistas, entre otros. La información será analizada, de forma separada y en conjunto.

La metodología seleccionada, permitirá el análisis de todas las fuentes o situaciones que han llevado a implementar un nuevo sistema de procedimiento penal.

3.2. Fuentes básicas de información:

Las fuentes consultadas en la recolección de datos, según su carácter, se clasifican en:

3.2.1 Fuentes materiales

Las fuentes materiales consideradas de importancia, para la realización de esta investigación son las siguientes:

Constitución Política de la República de Panamá.

Texto Único del Código Judicial de Panamá.

Anteproyecto del Código de Procedimiento Penal de Panamá.

Obras literarias del Derecho Nacional e Internacional.

Expedientes tramitados en los Juzgados Municipales y de Circuito de la Provincia Los Santos.

Estadísticas llevadas por CONAPREC.

3.2.2. Fuentes personales

Entre las fuentes personales consultadas se destacan:

- ❖ Los Magistrados del Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial.
- ❖ El Juez de Circuito y los Jueces Municipales de la Provincia de Los Santos.
- ❖ El Fiscal Superior del Cuarto Distrito Judicial.

- ❖ El Fiscal de Circuito y los Personeros Municipales de La Provincia de Los Santos.
- ❖ Abogados litigantes.
- ❖ Defensores de Oficio.

3.3. Población y muestra

Para la investigación, la población es la siguiente:

- ❖ Tres (3) Magistrados del Tribunal Superior.
- ❖ Un (1) Fiscal Superior.
- ❖ Un (1) Juez de Circuito y Siete (7) Jueces Municipales.
- ❖ Un (1) Fiscal de Circuito y Siete (7) Personeros Municipales.
- ❖ Dos (2) Defensores de Oficio.
- ❖ Diez (10) Abogados litigantes.

La muestra de la investigación corresponde a profesionales y estudiantes de la rama del derecho y la comunidad en todo su contexto; utilizando el muestreo estratificado, que busca unificar criterios que sirvan para lograr la posible solución del problema que nos aqueja y llegar a una conclusión, para así ofrecer un aporte significativo a la sociedad.

3.4. Instrumentación de las variables.

Las variables son de gran utilidad para el desarrollo del trabajo de investigación, ya que de ellas se obtiene información que responde a cuestionamientos relacionados con el problema.

Las respuestas permiten detalles informativos que responden a las alternativas que se desean; y es que las mismas pueden determinar, precisamente, el efecto o causa y son propensas a medición.

El estudio consta de dos (2) tipos de variables:

- ❖ **Variable Independiente:** *Con la implementación del nuevo Sistema Procesal Acusatorio*
- ❖ **Variable Dependiente:** *El proceso Abreviado será determinante para la solución rápida de las controversias penales.*

Las variables serán desglosadas utilizando criterios conceptuales, instrumentales.

3.4.1 Definición Conceptual.

Implementación: Establecer, instaurar, poner en ejecución instituciones, prácticas nuevas.

Sistema Procesal Acusatorio: El que obliga al juzgador a decidir según los resultados de la acusación pública o privada.

Proceso Abreviado: Juzgamiento que se define en la audiencia preliminar, buscando una solución anticipada del caso y posibilitando una disminución de pena.

Determinante: Tomar o hacer tomar una resolución (sentenciar).

Controversia: Discusión reiterada sobre algún asunto.

3.4.2. Definición Instrumental.

Con esta definición se propone determinar cuales serán los instrumentos a utilizar para recolectar información. En este caso se empleará como instrumentos de medición, la encuesta.

3.5. Descripción de los instrumentos de recolección de datos.

El instrumento de recolección de datos será una encuesta de aplicación directa y personal. Las preguntas serán abiertas y cerradas, dirigidas a Magistrados, Jueces de Circuito y Municipales Penales, Fiscales, Personeros Defensores de Oficio y Abogados litigantes.

3.5.1. La Encuesta

La encuesta fue el instrumento utilizado para lograr la información necesaria en el desarrollo del estudio, y por consiguiente, se escogió específicamente a personas dotadas de un gran conocimiento relacionado con el tema, objeto de la investigación.

3.6. Tratamiento de la información.

Con los resultados obtenidos se elaborarán cuadros estadísticos y gráficos que ayudan a tener una idea más clara del tema investigado.

CAPÍTULO CUARTO
ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1. Análisis de datos

En primera instancia, se analizarán los resultados obtenidos mediante encuesta realizada a profesionales del derecho, divididos de la siguiente manera: tres (3) Magistrados del Tribunal Superior, dos (2) Jueces de Circuito Penales, dos (2) Defensores de Oficio, tres (3) Fiscales, siete (7) Jueces Municipales y siete (7) Personeros Municipales, todos ellos, funcionarios que laboran en la Provincia de Los Santos. Además de diez (10) abogados litigantes de la región santeña.

Con los resultados obtenidos se elaborarán cuadros estadísticos y gráficos que ayudan a tener una idea más clara del tema y poder comprobar o deshechar la hipótesis planteada.

Cuadro N° 1

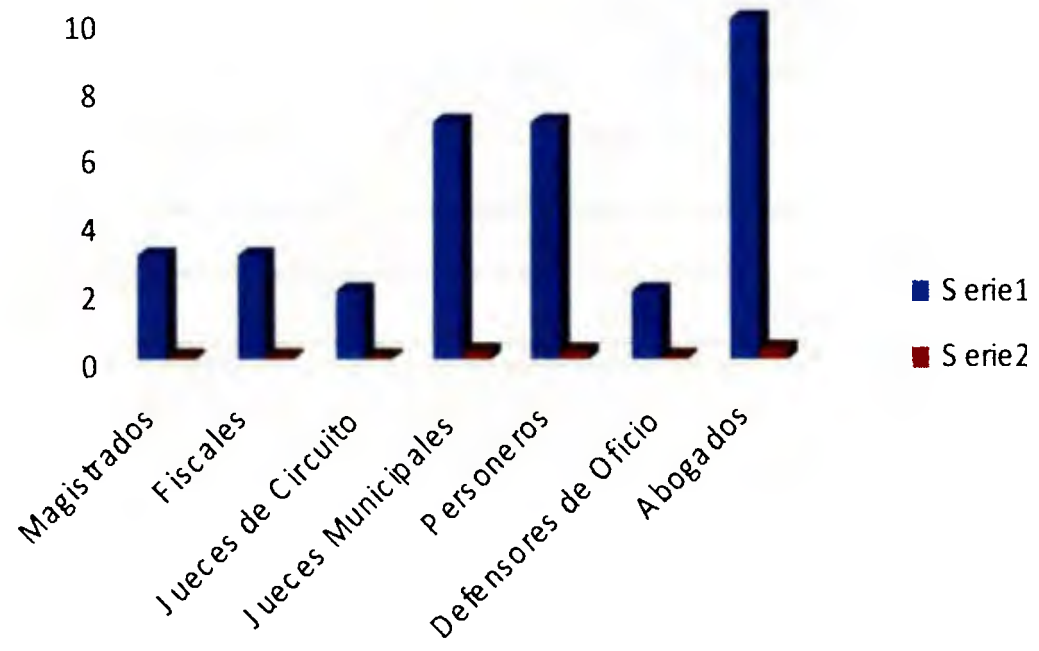
Distribución de personas encuestadas, según su ocupación.

Personas		Cantidad
.....f.....fr.		
Total	34	100.0%
Magistrados	3	8.8%
Fiscales	3	8.8%
Jueces de Circuito	2	5.9%
Jueces Municipales	7	20.6%
Personeros	7	20.6%
Defensores de Oficio	2	5.9%
Abogados	10	29.4%
.....		

FUENTE: Encuesta aplicada a Magistrados, Fiscales, Jueces de Circuito y Municipales, Personeros, Defensores de Oficio, Abogados de la Provincia de Los Santos.

Gráfica N° 1

Distribución de personas encuestadas, según ocupaciones



Fuente: Cuadro N° 1

Análisis de cuadro y gráfica N° 1

El cuadro N° 1 y su respectiva gráfica demuestran la distribución de personas encuestadas, según ocupaciones, el 29.4% de la población sujeto a estudio, estuvo representada por abogados; seguido de un 20.6% de Jueces Municipales, alcanzando un porcentaje igual por los Personeros; en cambio el 8.8% representa a los Magistrados y de igual forma a los Fiscales. Por último del 5.9% representa a los Jueces de Circuito e igual porcentaje los Defensores de Oficio.

Cuadro N° 2

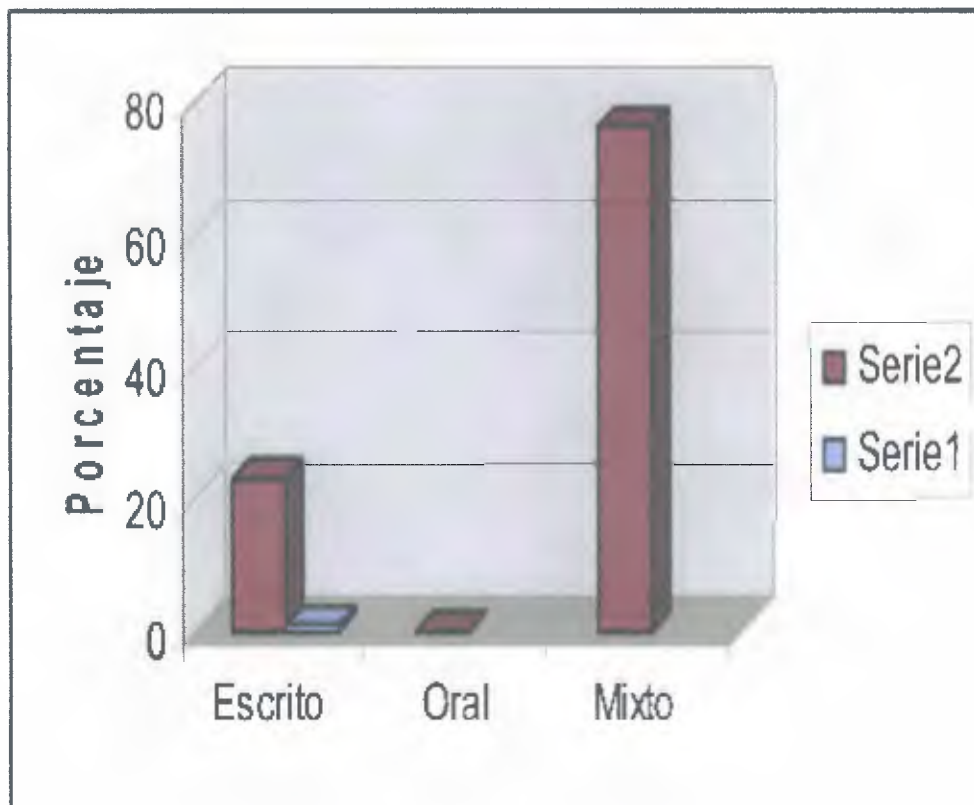
Petición actual del Proceso Abreviado

.....		
Clase de Tramitación		Cantidad
.....f.....fr.....		
Total	34	100.0%
Escrita	0	0.0%
Oral	8	23.5%
Mixto	26	76.5%
.....		

FUENTE: Encuesta aplicada a Magistrados, Fiscales, Jueces de Circuito y Municipales, Personeros, Defensores de Oficio, Abogados de la Provincia de Los Santos.

Gráfica N° 2

Petición actual del proceso abreviado



Fuente: Cuadro N° 2

Análisis de cuadro y gráfica N° 2

Las peticiones del Proceso Abreviado en el actual Código Judicial, puede darse conforme a un procedimiento escrito u oral, es decir, de forma mixta.

Como se puede observar en el cuadro N° 2, en relación con la pregunta, ¿cómo es el procedimiento existente en el Código Judicial, para la petición del Proceso Abreviado?, veintiséis (26) encuestados respondieron mixto, que representa el 76.5% de la población encuestada; mientras que ocho (8) encuestados respondieron oral, que representa un 23.5%, dicha respuesta nos deja la duda de desconocer que en el Código Judicial existen elementos de escritura y de oralidad.

El detalle de la encuesta nos muestra que los tres (3) Magistrados encuestados contestaron mixto, de igual forma lo hicieron los (3) Fiscales, los Defensores de Oficio y los dos (2) Jueces de Circuito; mientras que de los siete (7) Jueces Municipales, seis (6) respondieron trámite mixto y uno oral; de igual forma los siete (7) Personeros encuestados, seis (6) respondieron mixto y el resto oral; por su parte, de los diez (10) abogados encuestados, cinco (5) contestaron mixto y el resto oral.

Cuadro N° 3

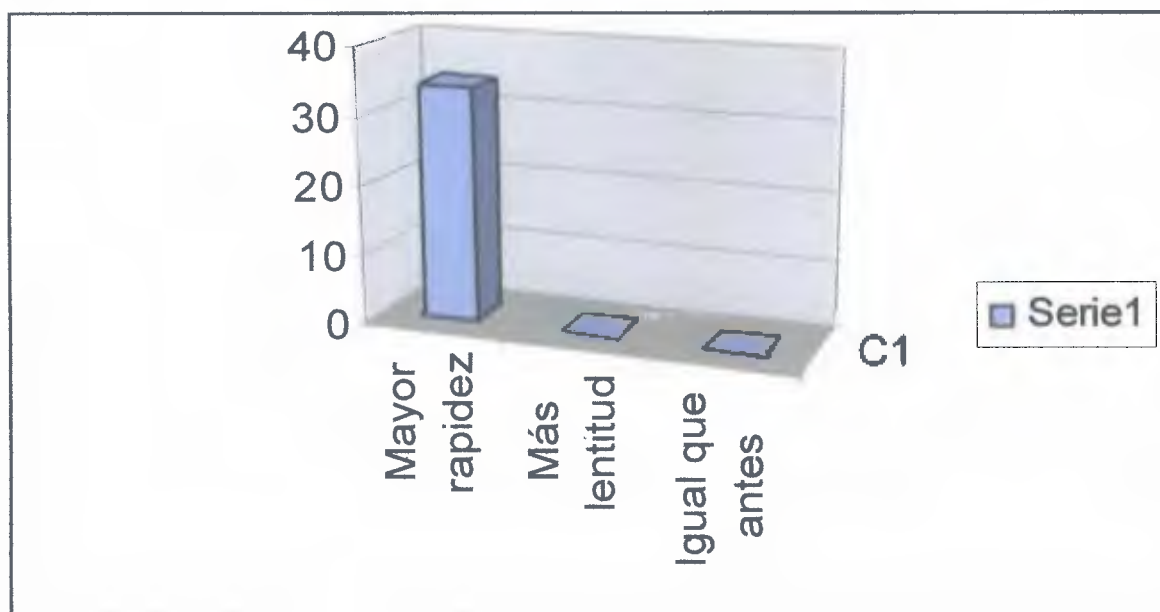
Influencia del trámite de la audiencia abreviada en la solución de las controversias penales.

Efecto del proceso		Cantidad
	f	fr
Total	34	100%
Mayor rapidez	34	100%
Más lentitud	0	00%
Igual al Ordinario	0	00%

FUENTE: Encuesta aplicada a Magistrados, Fiscales, Jueces de Circuito y Municipales, Personeros, Defensores de Oficio, Abogados de la Provincia de Los Santos.

Gráfica N° 3

Influencia del trámite de la audiencia abreviada en la solución de las controversias penales.



Fuente: Cuadro N° 3

Análisis de cuadro y gráfica N° 3

El cuadro N° 3 nos muestra claramente que el 100% de los encuestados respondió que el Proceso Abreviado influye con mayor rapidez a la solución de las controversias penales.

Cuadro N° 4

Conocimiento de las reformas al Proceso Penal

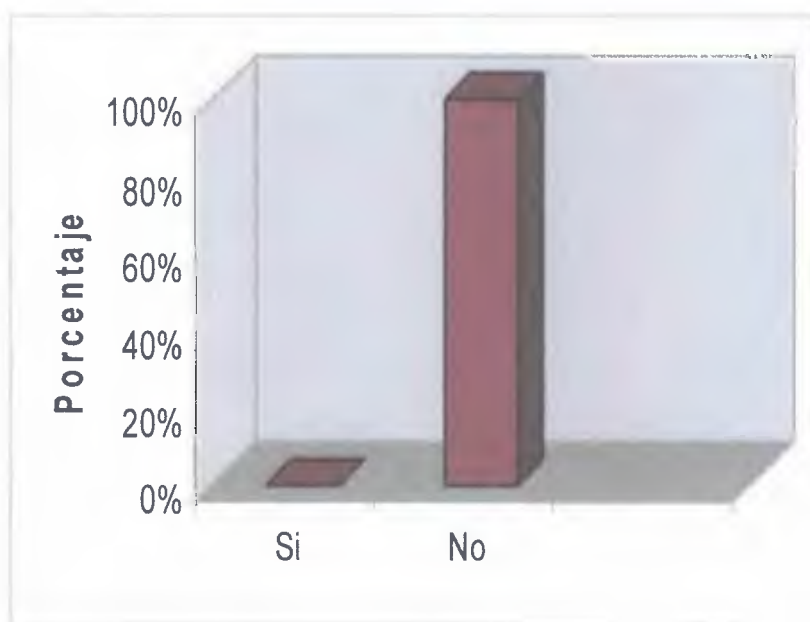
.....		
Conocimiento	Cantidad	
.....f.....	fr.....	
Total	34	100%
Si	34	100%
No	0	00%

.....

FUENTE: Encuesta aplicada a Magistrados, Fiscales, Jueces de Circuito y Municipales, Personeros, Defensores de Oficio, Abogados de la Provincia de Los Santos.

Gráfica N° 4

Conocimiento de las reformas al Proceso Penal



Fuente: Cuadro N° 4

Análisis de cuadro y gráfica N° 4

La pregunta N° 3 sobre el conocimiento de las Reformas al Procedimiento Penal, el 100% de los encuestados respondió, afirmativamente. La anterior explica que todos los encuestados tienen conocimiento del Nuevo Sistema Procesal Acusatorio.

Cuadro N° 5

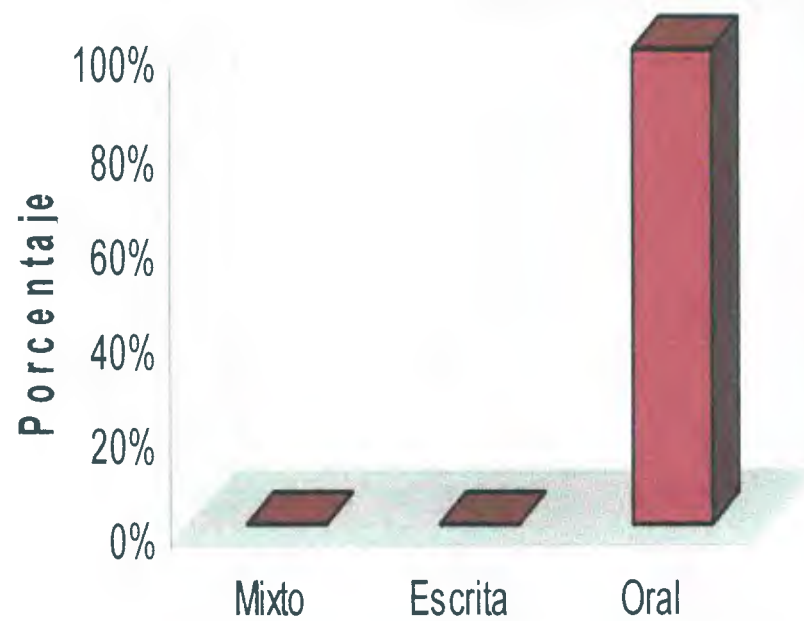
Solicitud del Proceso Abreviado en el Nuevo Sistema Procesal Penal

.....		
Clase de tramitación		Cantidad
.....f.....	fr.....
Total	34	100%
Escrita	00	00%
Oral	34	100%
Mixta	0	00%
.....		

FUENTE: Encuesta aplicada a Magistrados, Fiscales, Jueces de Circuito y Municipales, Personeros, Defensores de Oficio, Abogados de la Provincia de Los Santos.

Gráfica N° 5

**Solicitud del Proceso Abreviado en el Nuevo Sistema
Procesal Penal**



Fuente: Cuadro N° 5

Análisis de cuadro y gráfica N° 5

En el cuadro N° 5 nos refleja claramente que el 100% de los encuestados conoce el procedimiento para solicitar el Proceso Abreviado en el Anteproyecto de Código Procesal penal.

Cuadro N° 6

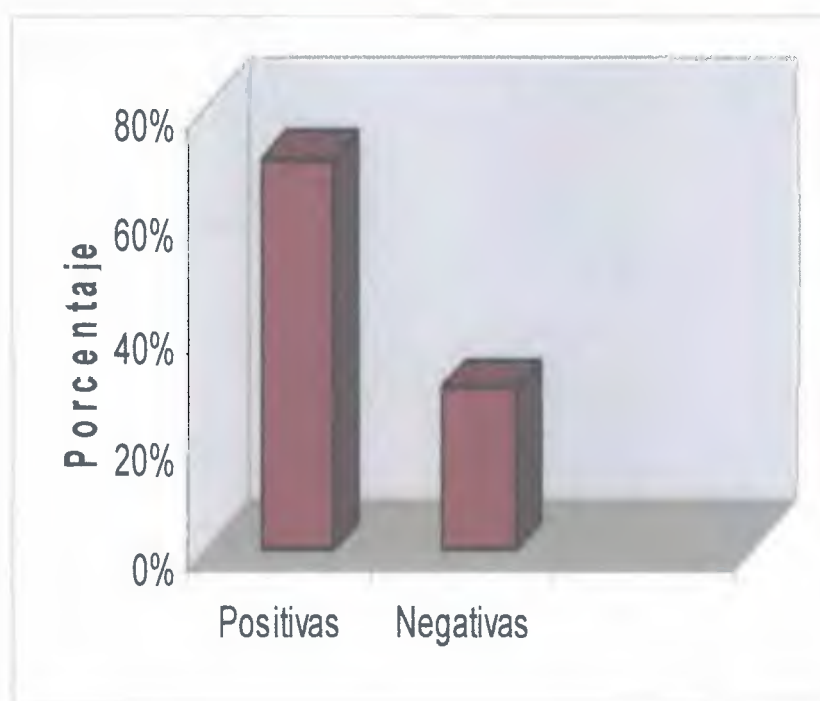
**Consideraciones para las partes, las transformaciones
que va ha sufrir el procedimiento penal en el Sistema
Acusatorio**

.....		
Efecto del proceso		Cantidad
.....f....	fr.....
Total	34	100.0%
Positivas	24	70.6%
Negativas	10	29.4%
.....		

FUENTE: Encuesta aplicada a Magistrados, Fiscales, Jueces de
Circuito y Municipales, Personeros, Defensores de Oficio, Abogados
de la Provincia de Los Santos.

Gráfica N° 6

**Consideraciones para las partes, las transformaciones que va ha sufrir el
procedimiento penal en el Sistema Acusatorio**



Fuente: Cuadro N° 6

Análisis de cuadro y gráfica N° 6

Frente a la interrogante sobre si son positivas o negativas las transformaciones que va a sufrir el Procedimiento Penal en el Nuevo Sistema Acusatorio, el 70.6% contestó positivamente, mientras que el 29.4% de forma negativa.

Esto significa que 24 encuestados respondieron positivamente, entre ellos están los tres (3) Magistrados, los tres (3) Fiscales, los dos (2) Jueces de Circuito, seis (6) Jueces Municipales, los siete (7) Personeros, un (1) Defensor de Oficio y cuatro (4) Abogados; además argumentaron:

- ❖ Habrá economía procesal, entre las demás garantías.
- ❖ Se aclaran dudas existentes en la legislación, como cuando se procesan a varios imputados y uno se acoge al proceso abreviado y los otros no.

Por parte, ocho (8) contestaron negativamente, entre ellos están un (1) Juez Municipal, un (1) Defensor de Oficio y seis (6) Abogados; argumentan que:

- ❖ La función de juzgar en el Proceso Abreviado debe ser del Tribunal Colegiado de Circuito.
- ❖ Debe ampliarse la forma de pedir el Proceso Abreviado.

Cuadro N° 7

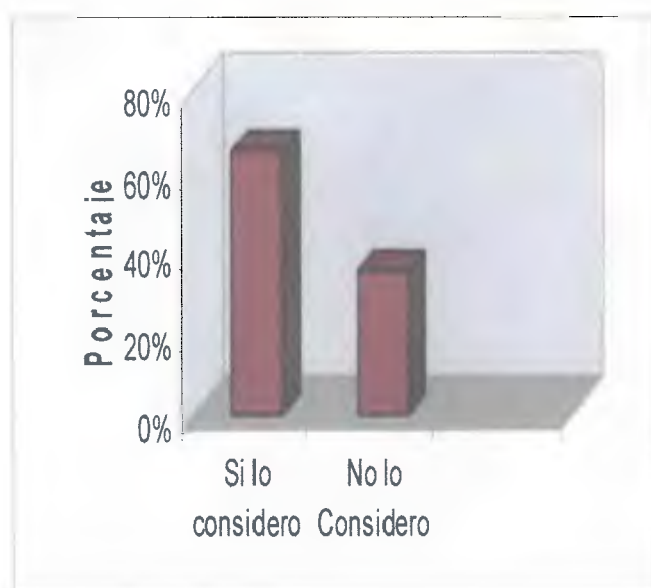
El Proceso Abreviado será determinante para la solución rápida de las controversias penales.

.....		
Consideraciones	Cantidad	
.....	f.....	fr.....
Total	34	100.0%
Sí lo considero	22	64.7%
No lo considero	12	35.3%
.....		

FUENTE: Encuesta aplicada a Magistrados, Fiscales, Jueces de Circuito y Municipales, Personeros, Defensores de Oficio, Abogados de la Provincia de Los Santos.

Gráfica N° 7

El Proceso Abreviado será determinante para la solución rápida de las controversias penales.



Fuente: Cuadro N° 7

Análisis de cuadro y gráfica N° 7

En el cuadro N° 7 se aprecia, que según la opinión de los encuestados, un 64.7% contestó que consideran al Proceso Abreviado determinante para la solución rápida de las controversias penales y hubo diversas razones que a continuación se anotaron:

- Porque recoge principios rectores del proceso.
- Con respecto al debido proceso tendrá una decisión en el menor tiempo.
- Las partes aceptan los hechos controvertidos.

En sentido contrario, el 35.3% de los encuestados no lo consideran determinante para la solución rápida de las controversias penales; algunas de las razones anotadas fueron:

- ❖ Que existen otras circunstancias que influyen en la solución rápida de las controversias penales (conciliación, desistimiento).
- ❖ El proceso directo.

Cuadro N° 8

Una sola oportunidad procesal para la petición del Proceso Abreviado, afecta el derecho de defensa.

.....		
Derecho a defensa		Cantidad
.....f.....		fr.....
Total	34	100.0%
No se afecta	30	88.2%
Sí se afecta	4	11.8%
.....		

FUENTE: Encuesta aplicada a Magistrados, Fiscales, Jueces de Circuito y Municipales, Personeros, Defensores de Oficio, Abogados de la Provincia de Los Santos.

Gráfica N° 8

**Una sola oportunidad procesal para la petición del Proceso Abreviado,
afecta el derecho de defensa**



Fuente: Cuadro N° 8

Análisis de cuadro y gráfica N° 8

Frente a la interrogante de si se afecta el derecho de defensa, al concedérsele al imputado una sola oportunidad procesal para solicitar el Proceso Abreviado, el 88.2% de los encuestados consideró que no se afecta y hubo diversas razones que a continuación se anotan:

Porque la defensa debe estar en todas la etapas procesales.

Es una elección que el apoderado judicial debe saber utilizar.

El imputado es notificado de cualquier denuncia o querella y puede nombrar a un defensor quien va a garantizar su defensa a lo largo del proceso.

El derecho de defensa está ligado con otras garantías.

Lo anterior confirma que dentro del Sistema Acusatorio, el derecho a defensa es una de las garantías fundamentales del imputado y esta es ejercida desde que se le endilga la comisión de un hecho considerado como delito.

En sentido contrario, el 11.8% consideró que se afecta el derecho a defensa por las siguientes razones:

Porque no se permite razonar cual es la mejor forma para garantizar su defensa.

Porque en un momento dado no vieron viable esa posibilidad.

Cuadro N° 9

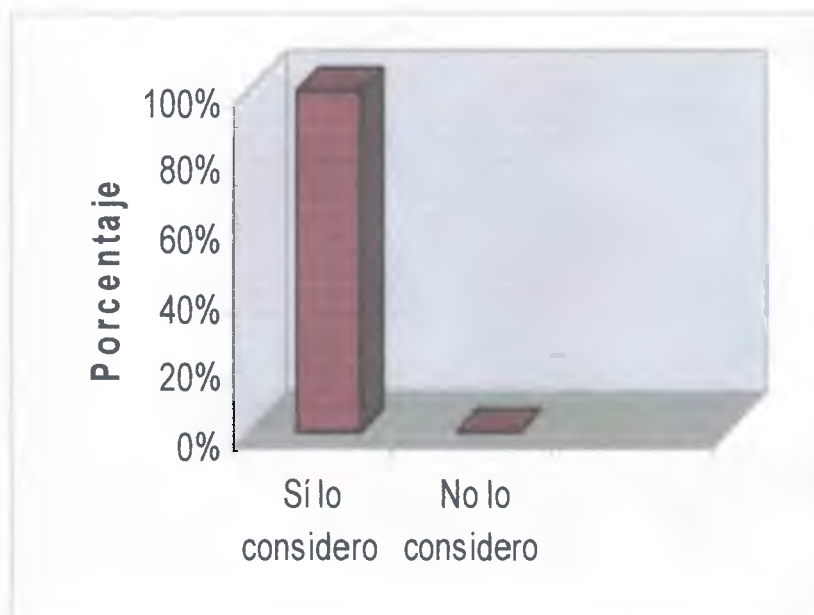
Se considera el Proceso Abreviado, una herramienta idónea para reducir la mora judicial.

.....		
Consideraciones	Cantidad	
.....	f.....	fr.....
Total	34	100.0%
Sí lo considero	34	100.0%
No lo considero	0	00.0%
.....		

FUENTE: Encuesta aplicada a Magistrados, Fiscales, Jueces de Circuito y Municipales, Personeros, Defensores de Oficio, Abogados de la Provincia de Los Santos.

Gráfica N° 9

Se considera el Proceso Abreviado, una herramienta idónea para reducir la mora judicial.



Fuente: Cuadro N° 9

Análisis de cuadro y gráfica N° 9

El cuadro N° 9 nos refleja, claramente, que el 100% de los encuestados respondieron que sí consideran el Proceso Abreviado como una herramienta idónea para reducir la mora judicial. Entre sus argumentos se destacan:

- ❖ Se contribuye a la economía procesal.
- ❖ Si es bien utilizado por las partes y el juzgador.
- ❖ Une la etapa de formulación de cargos, con la plenaria.
- ❖ Una vez admitido el Proceso Abreviado se decide en el fondo.

Cuadro N° 10

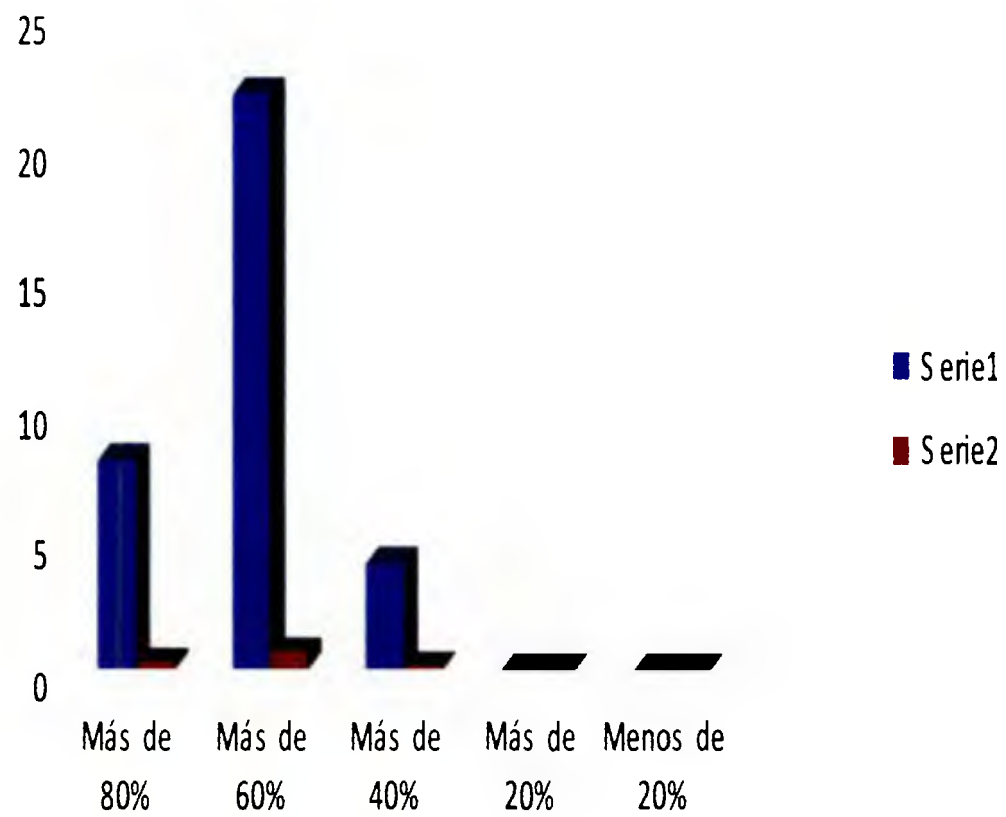
Porcentaje de los procesos que se acogen al trámite
abreviado

.....		
Porcentaje	Cantidad	
.....f.....	fr.....	
Total	34	100.0%
Más de 80%	8	23.5%
Más de 60%	22	64.7%
Más de 40%	4	11.8%
Más de 20%	0	00.0%
Menos del 20%	0	00.0%
.....		

FUENTE: Encuesta aplicada a Magistrados, Fiscales, Jueces de Circuito y Municipales, Personeros, Defensores de Oficio, Abogados de la Provincia de Los Santos.

Gráfica N° 10

**Porcentaje de los procesos que se acogen al trámite
abreviado**



Fuente: Cuadro N° 10

Análisis de cuadro y gráfica N° 10

En el cuadro N° 10 observamos que el 23.5% de los encuestados respondió que más del 80% de los procesos penales se acogen al Proceso Abreviado. Mientras que el 64.7% respondió que más del 60% de los procesos penales solicita el trámite abreviado

Por su parte, el 11.80% respondió que más del 40% de los procesos penales se tramitan por vía del Proceso Abreviado

Cuadro N° 11

Audiencias penales celebradas en el Juzgado Segundo de Circuito, Ramo Penal y en los Juzgados Municipales de las Provincia de Los Santos en el año 2006.

Juzgados	Audiencia Preliminar	Audiencia Abreviada	Juicio Ordinario	Total de Audiencias
Juzgado 2do. De Circuito	290	211	15	305
Juzgado Municipal Las Tablas	21	14	4	25
Juzgado Municipal de Guararé	7	3	1	8
Juzgado Municipal Los Santos	19	8	7	26
Juzgado Municipal Macaracas	7	4	1	6
Juzgado Municipal Pocrí	3	1	1	4
Juzgado Municipal de Pedasí	5	2	1	6
Juzgado Municipal de Tonosí	12	7	2	14

Fuente: Libros de registro de los Juzgados de Circuito y Municipales de la Provincia de Los Santos.

Grafica N° 11

Cantidad audiencias celebradas en el Juzgado Segundo y Municipales de la Provincia de Los Santos.



Fuente: Cuadro 11

Análisis de cuadro y gráfica N° 11

Mediante este cuadro y su respectiva gráfica se puede establecer la cantidad de procesos penales que se han tramitado mediante el Juicio Abreviado en los diferentes Tribunales de la Provincia de Los Santos durante el año 2006. La estadística que se presenta, únicamente, se refiere a la cantidad de audiencias que se celebraron ese año, no así a la cantidad de expedientes que ingresaron por primera vez a los Tribunales o que se resolvieron de diferentes formas (sobreseimiento provisional o definitivo, declinatoria, etc.).

Se puede observar que en el Juzgado Segundo del Circuito de Los Santos se efectuaron 290 audiencias preliminares de las cuales 211 se transformaron en juicios abreviados y solamente a 15 procesos se les efectuó la audiencia ordinaria, pero esa estadística no demuestra si se recurrió a este procedimiento por que el imputado estaba ausente o no fue solicitado en el término oportuno. Lo que nos demuestra que un 72.7 % de los procesos que se les celebran audiencias preliminares se transforman en juicios abreviados.

De igual forma ocurre en los Juzgados Municipales de la Provincia de Los Santos (Tonosí, Las Tablas, Macaracas, Los Santos, Pocrí, Pedasí, Guararé), donde se celebraron audiencias preliminares y más del 50% de las audiencias preliminares se transformaron en Juicios Abreviados.

Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

Luego de haber terminado la investigación se puede concluir con las siguientes consideraciones:

- Los requisitos en el actual Código Judicial, como en el Anteproyecto de Código Procesal penal, para la tramitación del Proceso Abreviado son idénticos; lo único que los diferencia es la forma de solicitarlo; ya que en el Código Judicial se hace de la forma mixta (escrito y oral) y en el anteproyecto de Código Procesal penal, se hace de forma oral, tal como lo establece el artículo 37 en concordancia con el 446 del anteproyecto.
- El Imputado es el único legitimado para solicitar el Proceso Abreviado, cuando la investigación está completa y la prueba resulte evidente.
- Los resultados obtenidos de las encuestas contestadas por los abogados litigantes, jueces, fiscales personeros y magistrados coinciden que el Proceso Abreviado en el nuevo sistema Procesal Acusatorio será una herramienta idónea para reducir la mora judicial.
- Conforme a las respuestas obtenidas de parte de los encuestados, el Proceso Abreviado será determinante en la solución rápida de las controversias penales.
- El estudio investigativo ha demostrado, que el conocimiento del Proceso Abreviado será solamente competencia de los Magistrados y Jueces de Garantía.

- Es evidente que entre el 60% y 80% de las causas penales se tramitan mediante el Proceso Abreviado.
- Los resultados obtenidos demuestran que es necesaria una modificación al Anteproyecto de Código Procesal Penal que se encuentra en la Asamblea de Diputados, tendientes a asignarle competencia a los Jueces del Tribunal Colegiado para que conozcan de las causas penales donde se solicite el Proceso Abreviado.

Recomendaciones

De las Conclusiones anteriores expuestas, se consignan las siguientes Recomendaciones:

- ❖ Modificar el Anteproyecto de Código Procesal Penal, en lo que respecta al Tribunal Colegiado de Circuito, para que conozca el Proceso Abreviado en los delitos de su competencia en primera instancia, ya que como está redactado el Anteproyecto de Código Procesal Penal los Jueces de Tribunal Colegiado de Circuito tienen competencia para juzgar ciertos delitos pero sin celebrar Juicios Abreviados
- ❖ Modificar el Anteproyecto de Código Procesal Penal, para que se establezca un término prudencial para dictar sentencia, en los casos complejos, para que realmente se pueda cumplir con otros principios importantes recogidos por el Sistema Acusatorio como: El principio de fundamentación, que a su vez es garante de los principios de defensa, igualdad de las partes.
- ❖ Se recomienda modificar el Anteproyecto de Código Procesal Penal, para que los imputados por los delitos de competencia de Tribunal Colegiado de Circuito se puedan beneficiar con el Proceso Abreviado.
- ❖ Para que los defensores particulares y los de oficio utilicen el Proceso Abreviado, cuando se reúnan los requisitos para su

celebración del juicio, ya que este proceso ha sido creado en beneficio del imputado, quien puede verse beneficiado con una rebaja de pena si es declarado culpable.

BIBLIOGRAFÍA.

- Arenas, Antonio Vicente. (1993) Procedimiento Penal, 4ª edición, Editorial Temis, Colombia.
- Arias Ramos, J. Derecho Romano, 4ª edición, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, España.
- Bailey, F. Lee. (1993) Como se ganan los Juicios, el Abogado Litigante, Limusa Noriega Editores, México.
- Barsallo, Pedro. (1992) Apuntes de Derecho procesal, Universidad de Panamá.
- Bernal Cuellar, Jaime y Eduardo Montealegre Lynett. El Proceso Penal, Fundamentos Constitucionales del Nuevo Sistema Acusatorio. 5ª edición. N° 1 vol. Universidad Externado de Colombia.
- Cárdenas G., Alberto. (1996) Procedimiento Penal Teórico Práctico, Editorial Jurista Gustavo Ibáñez, Impresión Lito Salera, Buenos Aires.
- Carnelutti, Francesco. (1950) Lecciones sobre el Proceso Penal, Trad. antiago Sentis Melendo, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires.
- Caferrata N., José I., (1994) La Prueba en el Proceso Penal, Edición Desalma, Buenos Aires Argentina.
- Claria O., Jorge. (1994) El proceso Penal su Génesis y Primeras Críticas Jurisdiccionales, Segunda Edición, Desalma, Buenos Aires Argentina.
- Curtis, Jack. (1973) Psicología Social, 3ª edición, Ediciones Martínez Roca, S. A., España.
- Davis Villalba, Enriqueta. (1992) Situación Actual del Sistema de Administración de Justicia en Panamá, Imprenta Universitaria.
- De Pina, Rafael. (1934) Manual de Derecho Procesal Penal, 1ª edición, Editorial Reus, S. A., Madrid.
- Delgado P. Nelson. (2005) Principios del Sistema Acusatorio, Ediciones Nuevas Jurídicas.

- Devis –Edchadias, Hernando. (1972) Compendio de Derecho Procesal, 2ª edición, Editorial ABC, Bogotá.
- Duran Trujillo, Rafael. (1957) Nociones de Responsabilidad Civil (Contractual y Delictuosa), Editorial Temis, Bogotá Colombia.
- Fabrega, Jorge. (1989) Estudios Procesales, Nº 1 vol. Editorial Gráficos Gracose Ltda, Costa Rica.
- Florián, Eugenio. (1990) Elementos de Derecho Procesal Penal. Trad. y referencia del Derecho Español por L. Pietro Castro. Reimpresión, Casa Editorial Boch, Imprenta Clarosó, Barcelona.
- Fournier Acuña, Fernando. (1943) Historia del Derecho, Ediciones Juricentro, Buenos Aires.
- Gálvez Roque, J. (1943) Legislación Penal Panameña, Imprenta López, Buenos Aires.
- García Trejos, Julián. (1996) Reformas al Proceso Penal Panameño, Coauspiciado por la agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Organo Judicial Panamá.
- Jiménez Asenjo, Enrique. Derecho Procesal Penal, 1ª edición, Nº 1 vol. ditorial revista de Derecho Privado, Madrid.
- Manzini, Vincenzo. (1951) Tratado de Derecho Penal. Trad. Antiago Sentis Melendo, Nº 2 vol. Ediciones Jurídicas Europa- América, Buenos Aires.
- Montero, Adolfo. (1994) Derecho Procesal Penal, El Sumario. Nº 1 vol. Parte General, Talleres Gráficas de Comput Formas.
- Montero, Adolfo. (1993) Derecho Procesal Penal. Nº 2 vol. Imprenta Universitaria, Panamá.
- Muñoz Pope, Carlos Enrique. (1995) Lecciones de Derecho Penal, Parte General. Imprenta Universitaria, Panamá.
- Muñoz Pope, Carlos Enrique. (2004) Estudios Para la Reforma del Proceso Penal, Ediciones Panamá Viejo.
- Peña Silvado, Teresa. (1996) Los Diversos Sistema Procesales Penales; Principios y Ventajas del Sistema Procesal Mixto Moderno. Proyecto ILANUD, para el mejoramiento de la Administración de Justicia.

Quintero, Cesar. (1971) Derecho Constitucional, Edición Mimeográfica, N° 2 vol. Universidad de Panamá.

Quintero O., Tiberio. (1990) La Prueba en Materia Penal, Edición E.d. Leyer, Santa Fé, Bogotá.

Rocco, Ugo. Tratado de Derecho Procesal Civil, N° 2 vol. Editorial Temis-Depalma, Buenos Aires Argentina.

Sáez F., Wilfredo. (1987) Compendio sobre aspectos del Proceso Penal Panameño, N° 2 vol. Panamá.

Veles M. Alfredo. (1969) Derecho Procesal Penal, Buenos Aires, Argentina.

Villalaz, Aura E. De. (1978) Derecho Penal Especial, Parte I, Panamá.

Zavala L. Carlos. (1947) Revista de Derecho Procesal, Año V, Buenos Aires Argentina.

REVISTAS

Chinchilla C., Rosaura. (1997) Proceso Penal Abreviado y Derecho Constitucional, Revistas de Ciencias Penales N° 14, Año 9. C.R.

Caferrata N., José. (1999) Juicio Penal Abreviado Revista de Ciencias Penales N° 11, Buenos Aires.

Mora M., Luís P. (1991) La importancia del Juicio Oral en el Proceso Penal. Revista de La Asociación de Ciencias Penales, C. R.

Paolorossi, Juliana. (2000) Juicio Abreviado, Revista de Ciencias Penales, N° 12, Universidad de Buenos Aires.

DICCIONARIOS

Cabanellas De Torres, Guillermo. (1988) Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Argentina.

- Cuestas G., Carlos H. (2000) Diccionario de Derecho Procesal penal, Colecciones Judiciales, Escuela Judicial, Organo Judicial de Panamá.
- Ossrio, Manuel. (1999) Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 26ª Edición, Editorial Helista, Argentina.

TEXTOS LEGALES

- Constitución Política de la República de Panamá.
- Código Judicial de la República de Panamá.

Otras Obras

Anteproyecto del Código Procesal Penal, Elaborado por la Comisión
Codificadora, Corte Suprema de Justicia, Mayo 2006.

Anexo

UNIVERSIDAD DE PANAMA Centro de Estudios de Postgrado Maestría en Derecho Procesal

Respetados Profesionales del Derecho:

Esta encuesta tiene por objetivo recabar información sobre el tema, **el Proceso Abreviado dentro del nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio**, con la cual optamos al Título de Maestría en Derecho Procesal.

La información suministrada será manejada con discreción y confidencialidad.

1. ¿Cómo es el procedimiento existente en el Código Judicial, para la petición del proceso abreviado?

Escrito ☐ Oral ☐ Mixto ☐

2. ¿En su opinión, cómo ha influido el trámite de la audiencia abreviada en la solución de las controversias penales?

Mayor Rapidez ☐ Más Lentitud ☐

Igual que el proceso ordinario ☐

3. ¿Conoce usted, las reformas que se van a introducir al sistema procesal penal?

Si ☐ No ☐

4. ¿Cómo va a ser el procedimiento para solicitar el proceso abreviado en el nuevo sistema procesal penal acusatorio?

Escrito ☐ Verbal ☐ Mixto ☐

5. ¿Cómo considera usted, para las partes, las transformaciones que va a sufrir el procedimiento penal, en lo concerniente al proceso abreviado, dentro del sistema procesal penal Acusatorio?

Positivas ☐ Negativas ☐

Explique:

6. ¿Considera usted que, el proceso abreviado dentro del nuevo sistema procesal acusatorio, será determinante para la solución rápida de las controversias penales?

Si lo considero ☐ No lo considero ☐

Explique:

7. ¿Se afecta al derecho de defensa, al concedérsele al imputado una sola oportunidad procesal para solicitar el proceso abreviado?

Si se afecta ☐ No se afecta ☐

Explique:

8. ¿En su opinión, considera usted que el proceso abreviado va a ser una herramienta idónea, para reducir la mora judicial?

Si lo considero ☐ No lo considero ☐

Explique:

9. ¿Según su experiencia, qué porcentaje de procesos se han acogido a los trámites abreviados?

Más del 80% Más del 60% Más del 40%

Más del 20% Menos del 20%

10. ¿Qué recomendaciones haría usted en relación al trámite del proceso Abreviado dentro del Sistema Acusatorio?
